
RESUMEN EJECUTIVO



INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

2014-2015



CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD

MIEMBROS DE NÚMERO



MIEMBROS ASOCIADOS



CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD

Rosario Córdoba, *Presidente*

Marco Llinás, *Vicepresidente*

EQUIPO TÉCNICO

Juan Felipe Quintero, *Secretario General-*

Investigador Asociado

Clara Patricia Martín, *Investigadora Asociada*

Daniel Gómez, *Investigador Asociado*

Víctor Fernández, *Investigador Asociado*

Paula Castañeda, *Investigadora Asociada*

Alejandro Fajardo, *Investigador Asociado*

Natalia Villalba, *Investigadora Asociada*



CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD

www.compitem.com.co

twitter.com/ColombiaCompitem

Dirección: Cra 9. No. 70 A - 35 Piso 4, Bogotá - Colombia.

Teléfono: {571} 7427413

Adriana Camacho, *Correctora de Estilo*

.PUNTOAPARTE BOOKVERTISING

Andrés Barragán, *Director Editorial*

Mateo Zúñiga, *Director de Arte*

Joulie Rojas, *Diseñadora*

Lina Martín, *Diseñadora*

José Aguilar, *Diseñador*

Alejandro Venegas, *Diseñador*



www.puntoaparte.com.co

ISSN 2016-1430. Copyright © 2014

Impreso en Bogotá D.C.

el 18 de Octubre de 2014 por Zetta Comunicadores.

Íconos cortesía de Laurent Patatin, Olivier Guin, Ben Rex Furneaux, Anton Khristolubov, Connie Shu, Matthew Hock y Scott Lewis de The Noun Project.

CONSEJO DIRECTIVO

David Bojanini, *Presidente Consejo Directivo*

Grupo de Inversiones Suramericana

Antonio Celia, *Vicepresidente Consejo Directivo*

Promigás

José Alejandro Cortés, *Sociedades Bolívar*

César Caicedo, *Colombina*

Carlos Enrique Moreno, *Organización Corona*

MIEMBROS DE NÚMERO

Alexander Montoya, *AlG Seguros Colombia*

Jaime Calvo, *AlG Seguros Colombia*

Luis Alberto Botero, *Alianza Team*

Ernesto Fajardo, *Alpina*

Carlos Enrique Cavellier, *Alquería*

Carlos Raúl Yepes, *Bancolombia*

Jorge Esteban Giraldo, *Bimbo de Colombia*

Carlos Jacks, *CEMEX*

César Caicedo, *Colombina*

Guillermo Trujillo, *Federación Nacional de Cafeteros*

María Aparicio, *Federación Nacional de Cafeteros*

José Alberto Vélez, *Grupo Argos*

David Bojanini, *Grupo de Inversiones*

Suramericana

Santiago Piedrahita, *Grupo Orbis*

Carlos Ignacio Gallego, *Grupo Nutresa*

Alfonso Ocampo, *Harinera del Valle*

Francisco Thiermann, *IBM de Colombia*

Álvaro Merino, *IBM de Colombia*

Rose Marie Saab, *Independence*

David González, *Intel*

Carlos Rebellón, *Intel*

Harold Eder, *Inversiones Manuelita*

Carlos Andrés Uribe, *Ladrillera Santa Fé*

Carlos Enrique Moreno, *Organización Corona*

Antonio Celia, *Promigás*

Jaime Gutiérrez, *Ptesa*

Daniel Fernández, *Siemens*

Álvaro José Henao, *Smurfit Kappa Cartón de Colombia*

José Alejandro Cortés, *Sociedades Bolívar*

Josefina Agudelo, *TCC Inversiones*

Francisco José Barberi, *Tecnoquímicas*

Marcelo Boffi, *The Coca-Cola Company*

Bruno Pietracchi, *The Coca-Cola Company*

Carlos Arturo Londoño, *Valorem*

MIEMBROS ASOCIADOS

Bruce Mac Master, *ANDI*

Gustavo Mutis, *Centro de Liderazgo y Gestión*

Julián Domínguez, *Confecámaras*

Camilo Granada, *FTI Consulting*

Andrés Cadena, *McKinsey & Company*

Rafael Mejía, *SAC*

Pablo Navas, *Universidad de Los Andes*

Jesús Ferro, *Universidad del Norte*

Hans-Peter Knudsen, *Universidad del Rosario*

José Manuel Restrepo, *Universidad del Rosario*

Juan Luis Mejía, *Universidad EAFIT*

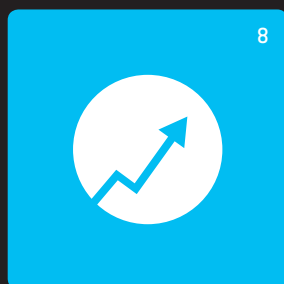
Francisco Piedrahita, *Universidad ICESI*

Jorge Humberto Peláez, *Pontificia Universidad Javeriana*

Ramón de la Torre



CONTENIDOS



INTRODUCCIÓN



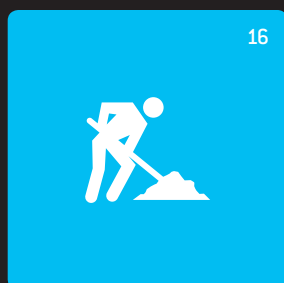
EDUCACIÓN



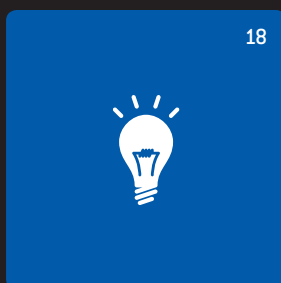
SALUD



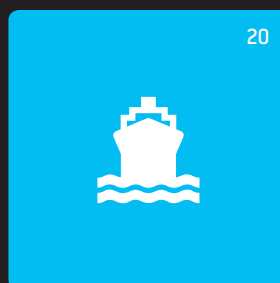
PENSIONES



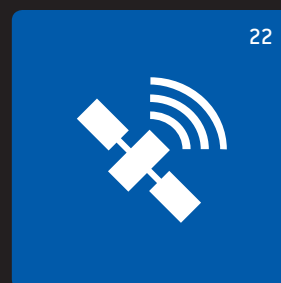
MERCADO LABORAL
Y FORMALIZACIÓN



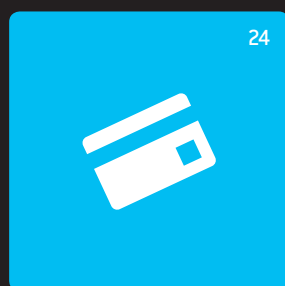
CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



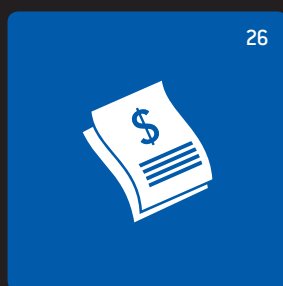
DESEMPEÑO LOGÍSTICO:
INFRAESTRUCTURA,
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA



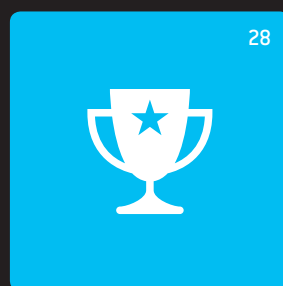
TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES



SISTEMA FINANCIERO



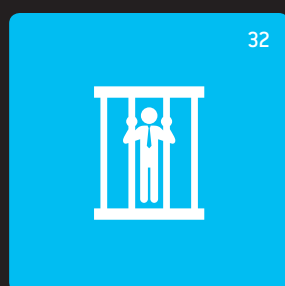
SISTEMA TRIBUTARIO



PROMOCIÓN
Y PROTECCIÓN
DE LA COMPETENCIA



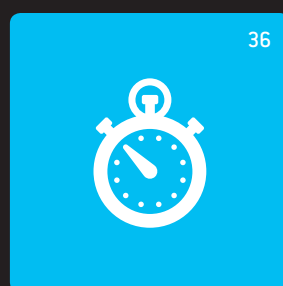
JUSTICIA



CORRUPCIÓN



ENERGÍA



EFICIENCIA
DEL ESTADO PARA LA
COMPETITIVIDAD



PRESENTACIÓN

Este año, el Consejo Privado de Competitividad presenta al país el Informe Nacional de Competitividad 2014-2015. El Informe, el octavo en su serie, busca evaluar los avances del país en algunas dimensiones clave de competitividad, plantear metas claras para el actual Gobierno y dar recomendaciones sobre cómo alcanzarlas.

Desde su creación en 2005, el Sistema Nacional de Competitividad, hoy Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCEI), ha sido el espacio de articulación público-privada mediante el cual se diseña y se monitorea la agenda de competitividad del país. El Consejo Privado de Competitividad tiene un rol crucial en este Sistema, ya que como lo expresó el Presidente Santos el pasado 13 de agosto en la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación, máxima instancia del SNCEI, el Consejo debe ser el veedor de esta agenda y acompañar permanentemente al Gobierno en su implementación.

Hace 8 años, cuando empezó a operar el SNCEI, las entidades participantes definieron la Visión 2032 para el país. En ese momento, Colombia se fijó la meta de

llegar a ser el tercer país más competitivo de América Latina para ese año, con un nivel de ingreso per cápita equivalente al de un país de ingresos medio altos, a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca significativamente los niveles de pobreza y desigualdad. Este año, el Informe plantea metas volantes a 2018, basado en el comportamiento de indicadores clave de cada dimensión durante el período 2010-2014, precisamente con miras a ser el tercer país latinoamericano en materia de competitividad en 2032.

El inicio de Gobierno marca un momento histórico para dar un salto en competitividad, pues a pesar de los esfuerzos, el país no ha logrado grandes avances en los últimos años. En parte, esto se debe a los rezagos en los requerimientos básicos que requiere cualquier economía para lograr competir. Son evidentes las deficiencias del país en pilares fundamentales de la competitividad como Infraestructura, Instituciones y Salud y Educación Básica, que mide el Foro Económico Mundial en su Informe Global de Competitividad.

Desde hace algún tiempo venimos insistiendo en que la competitividad del país no es más que la suma de los resultados de los territorios. Con el fin de tener una herramienta que año a año nos



permitiera identificar los puntos fuertes y débiles de cada región del país, desde 2013 el Consejo Privado de Competitividad, en alianza con la Universidad del Rosario, estaremos publicando anualmente el Índice Departamental de Competitividad (IDC). Esperamos que el IDC 2014, que estamos lanzando también el día de hoy, le permita a todas las regiones organizar sus propias agendas de competitividad y focalizar esfuerzos.

Por otra parte, el país se aleja de su visión de largo plazo en la medida en que depende cada vez más de unos pocos productos de muy baja sofisticación y de poco valor agregado. Para lograr cambiar esta tendencia, el Consejo Privado de Competitividad ha insistido desde hace algún tiempo en la necesidad de adoptar una Política de Desarrollo Productivo que permita la transformación de su aparato productivo. Con esto en mente, este año hemos decidido elaborar un documento –complementario a este Informe– que pretende aterrizar las propuestas del Consejo en la materia y dar luces al Gobierno sobre el diseño y la ejecución de una política de este tipo.

El sector privado también juega un papel fundamental en la competitividad. No debemos esperar a que el Gobierno haga todo, ya que existe mucho espacio para mejorar la productividad al interior de las empresas y en el trabajo coordinado con otros actores. Es crucial que el sector privado reconozca su corresponsabilidad e identifique las áreas en las que podría mejorar su productividad.

Espero que este Informe que se presenta hoy sea una pieza clave para mantener el foco y no desviarnos de la Visión 2032 y que, dada la coyuntura de inicio de Gobierno, sirva para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. El gran reto hacia delante es garantizar la continuidad del SNCEL y la ejecución de la Agenda Nacional de Competitividad por parte de todas las entidades del Estado que tienen a su cargo la ejecución de las políticas públicas.

Por su esfuerzo y dedicación en la elaboración del VIII Informe Nacional de Competitividad, agradezco al equipo del Consejo Privado de Competitividad: a Marco Llinás, vicepresidente; a los investigadores Juan Felipe Quintero, quien estuvo a cargo de la coordinación del Informe, Clara Patricia Martín, Daniel Gómez, Víctor Fernández, Paula Castañeda, Alejandro Fajardo, Natalia Villalba y a todo el personal administrativo.

De otro lado, felicito a todo el equipo del sector público y privado que hace parte del SNCEL, por su compromiso en el diseño e implementación de nuestra agenda de trabajo: a Jaime Bueno, Consejero Presidencial para el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación; a Cecilia Álvarez, Ministra de Comercio, Industria y Turismo; a Yaneth Giha, Directora de Colciencias; a Simón Gaviria, Director de Planeación Nacional y a Julián Domínguez, Presidente de Confecámaras. De manera muy especial, al señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, por abrir siempre un espacio de

discusión para la agenda y por su confianza en el Consejo Privado de Competitividad y la labor del Sistema.

Por último, mis más sinceros agradecimientos a todos los miembros del Consejo Privado de Competitividad. Gracias por su confianza y permanente y generoso apoyo. Su interés y constante participación han contribuido de manera invaluable al fortalecimiento institucional de esta entidad en los últimos años, a la consolidación de una agenda de trabajo con prioridades claras y pertinentes y a los resultados concretos conseguidos hasta ahora.

ROSARIO CÓRDOBA GARCÉS

Presidente

Consejo Privado de Competitividad



INTRODUCCIÓN

En los últimos cuatro años fue muy poco lo que el país avanzó en competitividad. De acuerdo con el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), el cual se ha convertido en el principal referente en materia de competitividad a nivel mundial, Colombia pasó, entre 2010 y 2014, del puesto 68 entre 139 países al puesto 66 entre 144 países. Esta situación es preocupante en la medida en que en el contexto latinoamericano, el país ocupa el séptimo lugar, lejos de la meta fijada hace ocho años de convertirse en 2032 en la tercera economía más competitiva de América Latina. En el entretanto, otros países como Costa Rica, Perú y Panamá han tenido logros importantes en materia de competitividad, que les ha permitido avanzar sustancialmente en este indicador, superando a Colombia.

Costa Rica, por ejemplo, entre 2006 y 2014 avanzó 17 posiciones en el Índice Global de Competitividad, pasando de ser el séptimo país más competitivo de América Latina a ser el tercero. De hecho, para que Colombia logre ocupar dicho lugar debería avanzar más de 15 posiciones en este indicador. Para el mismo período, Perú pasó de ser el noveno a convertirse en el sexto, mejorando 13 posiciones en el indicador

del WEF. El progreso de Panamá también ha sido importante, subió 12 puestos y en la actualidad es el segundo país latinoamericano (ver cuadro a continuación).

Las leves mejoras de Colombia en materia de competitividad y la imposibilidad de avanzar frente a los países de la región conllevan a una reflexión sobre el trabajo llevado a cabo durante los últimos años. Si bien se han hecho varios esfuerzos para mejorar la competitividad del país, estos han quedado cortos y de continuar la misma tendencia, la posibilidad de alcanzar la meta en 2032 será cada vez más remota. Para corregir esto, el Informe Nacional de Competitividad 2014–2015 plantea una agenda de competitividad de gran envergadura que, de implementarse, permitiría mejorar los fundamentales microeconómicos para que todos los sectores se beneficien.

De acuerdo con Rodrik¹, los países logran altos crecimientos sostenidos en el tiempo en la medida en que implementan a profundidad dos tipos de agenda: horizontal (o transversal) y vertical. Una agenda horizontal debe apuntar a mejorar aspectos transversales a todos los sectores de la economía —como calidad de la educación, construcción de corredores logísticos, flexibilización del mercado laboral, entre otros.

Una agenda vertical implica la implementación de medidas que solucionen las distorsiones y cuellos de botella que limitan la productividad de sectores existentes y el surgimiento de nuevos sectores o actividades de mayor productividad. Infortunadamente no se puede abordar de manera simultánea los cuellos de botella que limitan la productividad de todos los sectores, lo que hace necesario el establecimiento de prioridades. La evidencia

empírica muestra que países como Corea del Sur, Malasia, Tailandia y China, han implementado agendas verticales profundas que les han permitido convertirse en los milagros económicos de los últimos cincuenta años. Este tema es tan importante, que este año el Consejo Privado de Competitividad está presentando una propuesta de Política de Desarrollo Productivo para Colombia, de manera que sirva de insumo para el Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 y el país organice los esfuerzos que está haciendo en la materia.

Sin embargo, hay que resaltar que una mejora en la competitividad del país no es responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional. Desde hace varios años el Consejo Privado de Competitividad viene haciendo énfasis en que las regiones juegan un rol fundamental en esta, en la medida en que una parte importante de la competitividad del país se gesta desde el nivel local. Sin embargo, con algunas excepciones, se evidencia una gran debilidad institucional desde el nivel local, que hace indispensable continuar fortaleciendo las Comisiones Regionales de Competitividad (CRC), de manera que se conviertan en los espacios de discusión y definición de las visiones de largo plazo de los departamentos.

Al igual que el Gobierno nacional, los gobiernos locales deben implementar agendas tanto horizontales como verticales en materia de competitividad. Más aún, buena parte de la agenda vertical del país debe ser resuelta desde el nivel local, en la medida en que existen cuellos de botellas particulares al contexto geográfico donde los sectores se ubican. Es por esto que desde el año pasado, el Consejo Privado de Competitividad viene lanzando el Índice Departamental de

EN VEZ DE AVANZAR HACIA
LA META DE CONVERTIRSE
EN EL TERCER PAÍS MÁS
COMPETITIVO DE LA REGIÓN,
COLOMBIA HA RETROCEDIDO

Cuadro. Top 10 de países de América Latina
en el Índice Global de Competitividad del WEF.

Los 10 países más competitivos en América Latina			
	En 2006-2007 entre 122 países	En 2010-2011 entre 139 países	En 2014-2015 entre 144 países
1	Chile (27)	Chile (30)	Chile (33)
2	México (52)	Panamá (53)	Panamá (48)
3	El Salvador (53)	Costa Rica (56)	Costa Rica (51)
4	Panamá (60)	Brasil (58)	Brasil (57)
5	Colombia (63)	Uruguay (64)	México (61)
6	Brasil (66)	México (66)	Perú (65)
7	Costa Rica (68)	Colombia (68)	Colombia (66)
8	Argentina (70)	Perú (73)	Guatemala (78)
9	Perú (78)	Guatemala (78)	Uruguay (80)
10	Uruguay (79)	El Salvador (82)	El Salvador (84)

Fuente: WEF 2006, 2010 y 2014.

Competitividad, el cual se espera sirva como instrumento de la política de competitividad a nivel local.

Pero la competitividad no depende sólo de sector público, el sector privado juega un papel fundamental en esta. Existe mucho espacio para mejorar la productividad al interior de las empresas sin tener que esperar a que el Gobierno haga todo. Por ejemplo, mayor innovación, mejoras en materia logística, uso de TIC, capacitación del capital humano, trabajo en *clusters*, vínculos universidad–empresa, entre otros, con certeza incrementarían la productividad de las

empresas y, por consiguiente, la competitividad del país. Por lo tanto, es crucial que el sector privado reconozca su corresponsabilidad con la competitividad del país e identifique las diferentes áreas donde podría mejorar su productividad.

En este sentido, el Informe Nacional de Competitividad 2014-2015 contiene en esta ocasión 14 capítulos, cada uno de los cuales incluye un diagnóstico de los temas que el Consejo Privado de Competitividad considera son los más relevantes, así como, metas y acciones específicas para impactar la competitividad y lograr

en 2032 ser el tercer país más competitivo de la región. Como todos los años, se espera que este documento se convierta en un termómetro para medir cómo va el país en diferentes dimensiones que impactan su competitividad.





EDUCACIÓN

El desarrollo y el crecimiento de un país dependen en gran medida de su talento humano, el cual influye directamente sobre la productividad de las empresas y, por tanto, en la capacidad de estas para competir a nivel mundial.

La escasez de capital humano es uno de los principales cuellos de botella que limitan el proceso de transformación del aparato productivo. En este sentido, la educación no es sólo un prerrequisito para elevar la productividad de todos los sectores económicos, sino también un instrumento crítico en el marco de una política de desarrollo productivo para el país.

Entre agosto de 2010 y junio de 2014 el país aumentó la cobertura de la atención integral de la primera infancia a una tasa promedio cercana al 17% anual, duplicando el número de niños cobijados bajo esta modalidad. De seguir al ritmo de este cuatrienio, el país deberá esperar hasta el año 2020 para que la población vulnerable en este rango de edad esté atendida integralmente.

En educación básica y media, aunque preocupan los descensos en cobertura neta en transición y primaria, alarman aún más las brechas en calidad. Aproximadamente 40% de los bachilleres matriculados en educación superior puntúa en nivel bajo en la prueba Saber 11, contra 18% que puntúa en nivel alto. De otro lado, los resultados de la prueba PISA 2012 tampoco fueron buenos y ubicaron el país en el puesto 62 entre 65 paí-

ses. De continuar la tendencia del período 2006-2012, en PISA 2018 el 76% de los estudiantes colombianos de 15 años puntuaría por debajo del nivel mínimo en matemáticas. Para ser el tercer país latinoamericano en la proyección de PISA 2033, sería necesario disminuir este porcentaje a 65% en 2015 y a 62% en 2018.

Expertos nacionales y extranjeros —incluida la OCDE— coinciden en que la calidad del sistema educativo depende principalmente de la calidad de sus docentes. No obstante, en Colombia quienes ingresan a la carrera docente son, en términos generales, los bachilleres con los resultados más bajos en las pruebas Saber 11. Además, sólo 9,5% de los programas de ciencias de la educación cuenta con acreditación de alta calidad y los graduados universitarios con peor desempeño en las pruebas Saber Pro son precisamente los de estas carreras.

El país viene aumentando rápidamente las tasas de cobertura en educación superior a ritmos similares a los que experimentaron países como Chile y Uruguay en la primera década del milenio, y se espera que Colombia llegue a niveles similares a los de éstos en 2018. Adicionalmente, este acelerado aumento en cobertura no ha ido de la mano de un cambio en el esquema de financiación, tema crucial para el funcionamiento de la educación superior en el país.

La calidad de la educación superior no se diferencia mucho de la de los niveles previos. Sólo 8,5% de los programas académicos del país y 11,5% de las instituciones de educación superior están acreditados con alta calidad. Esto explica que muy pocas de las universidades colombianas aparezcan en los *rankings* mundiales. En el último *ranking* de QS 2013/2014, por ejemplo, sólo tres universidades colombianas lograron ubicarse en el Top 500, la mejor de ellas en el puesto 274.

Finalmente, el país empieza a mostrar síntomas preocupantes de descalce entre oferta de formación y demanda por competencias. De acuerdo con el más reciente reporte de Escasez de Talento Humano de ManpowerGroup (2014), alrededor de 57% de las empresas en el país reportaron dificultades a la hora de encontrar el talento humano adecuado en 2014, frente a 35% en 2010.

Algunos estudios a nivel sectorial dan cuenta de las brechas cuantitativas. Un estudio de brechas de talento humano en la industria de tecnologías de información (TI) concluyó que al paso al que se ha venido comportando la oferta de ingenieros de sistemas, para el año 2020 habría entre 55.000 y 160.000 vacantes por cubrir en el sector de TI.

Lo cierto es que aunque diferentes ministerios y agencias públicas han venido implementando programas y proyectos para mejorar la pertinencia de la formación, estos esfuerzos se han realizado de manera descoordinada y muchos de ellos carecen de coherencia frente a las apuestas del país y los departamentos, y los actores locales —encargados de liderar iniciativas *cluster* y/o apuestas productivas— se encuentran perdidos sobre cómo abordar este tema, ante la falta de una política clara.

A continuación se presentan las principales recomendaciones en la materia.



No.	Recomendación	Plazo	Avance 2014	Observaciones avance 2014	Lo mínimo a realizar en 2015	Principales responsables
1	Utilizar el Sistema General de Regalías para aumentar cobertura de los programas de atención integral a la primera infancia.	Mediano		x	Todos los entes territoriales sin cobertura total de población vulnerable deberán presentar proyectos de primera infancia ante los OCAD.	Alcaldías y Gobernaciones.
2	Mejorar la calidad del capital humano que ingresa a la carrera docente.	Corto		x	Implementar una campaña masiva de comunicación para cambiar la percepción sobre la carrera docente y buscar atraer mejor capital humano a ella.	Mineducación.
3	Fortalecer la calidad de los programas de formación de docentes en el país.	Largo		Se construyeron los lineamientos de calidad para la formación inicial de docentes.	Identificar e inhabilitar la continuidad de programas de baja calidad que hoy están formando los futuros docentes del país. Revisar criterios para obtención del Registro Calificado.	Mineducación - Conaces - CNA.
4	Implementar evaluaciones de desempeño a toda la planta docente del sector oficial del país.	Mediano		Se dio un paso atrás con la decisión de suspender las evaluaciones temporalmente.	Lograr un acuerdo con Fecode sobre el formato de la evaluación docente y reiniciar su implementación.	Mineducación.
5	Implementar la estrategia "Un País Unido por la Educación."	Mediano		El Pacto por la Educación logró la firma del Gran Acuerdo por la Educación el 5 de agosto de 2014.	Hacer seguimiento a los avances de los indicadores definidos en el acuerdo y garantizar el compromiso del Gobierno.	Ciudadanía.
6	Diseñar e implementar una política de TIC en educación que integre el acceso, la formación del docente en el uso de TIC para educar, los ambientes de aprendizaje, la definición de contenidos, etc.	Corto		Ver capítulo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.		
7	Incentivar competencia al SENA para inducir una mayor calidad en la formación TyT.	Mediano		Todas las IES que ofrecen formación TyT ya pueden usar el contrato de aprendizaje.	Crear un fondo de financiación a estudiantes en programas TyT en los que compitan IES públicas y privadas y SENA.	Icetex - Mineducación - Mintrabajo - SENA.
8	Implementar el Conpes de Gestión del Recurso Humano, apuntando hacia la creación de una agencia que se encargue de diseñar y gestionar el Marco Nacional de Cualificaciones.	Mediano		Se ha avanzado en la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones y se culminó el piloto de normalización de competencias en el Cluster TIC de Medellín.	Garantizar que la estrategia quede en manos de una instancia supraministerial, con un equipo de trabajo y presupuesto.	Consejería Presidencial para el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (CPSCel) - CIGERH.
9	Cerrar brechas de capital humano a través de las Comisiones Regionales de Competitividad.	Mediano		x	Difundir lineamientos construidos a partir de pilotos regionales (CPC-PNUD). Consolidar el Sinidel.	MinCIT - CPSCel. DANE - Mintrabajo.
10	Diseñar e implementar mecanismos de aseguramiento de la calidad, monitoreo y control para la atención a la primera infancia.	Mediano	x	x	Consolidar Sistema Único de Información de la Niñez para hacer seguimiento a todos los niños 1 a 1. Evaluar a los cuidadores y docentes de educación inicial como a los docentes de educación básica.	ICBF - Mineducación - CIPI.
11	Reformar el actual sistema de financiamiento de la Educación Superior.	Mediano	x	x	Crear bolsas concursables y/o esquemas contrato-programa para financiar IES.	Mineducación.



SALUD

La productividad laboral, determinante clave en la competitividad de un país, depende de distintos factores dentro de los cuales se encuentra la buena condición de salud de la población. Si bien Colombia incrementó su productividad laboral entre 2010 y 2013 en 1,3% en promedio anual, en el contexto latinoamericano sólo está por encima de Brasil y Bolivia. Si Colombia quiere alcanzar a México, que de continuar la tendencia en 2032 sería el tercer país con la productividad laboral más alta en la región, deberá incrementar su productividad en 4,1% en promedio por año entre 2014 y 2018.

Aunque son distintos los elementos que determinan la salud de una población —la educación, las condiciones laborales y salariales, la infraestructura, entre otros—, un aspecto fundamental es su sistema de salud y la posibilidad de que este pueda brindar acceso y calidad en los servicios que ofrece.

Si bien a través de la Ley 100 de 1993 y de otras leyes y decretos posteriores se han realizado esfuerzos permitiendo alcanzar logros importantes en materia de salud, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) aún presenta grandes deficiencias que impiden garantizar una población sana. Por ejemplo,

aunque se está cerca de la cobertura universal, el acceso a los servicios de salud —entendido como el porcentaje de personas que utilizó los servicios al momento de necesitarlos— se ha reducido. Mientras entre 1997 y 2012 la cobertura del aseguramiento pasó de 56,9% a 91,1%, el acceso disminuyó de 79,1% a 75,5%. A nivel regional, a excepción de Antioquia y la Orinoquía, se evidencia una reducción en el acceso a los servicios de salud².

Aunque al cierre de este Informe la Ley Estatutaria no ha sido sancionada por el Presidente y sólo se conoce un borrador del texto final y un comunicado de la Corte Constitucional manifestando la exequibilidad, una normatividad como esta traería consigo la necesidad de una transformación estructural del SGSSS, en la medida en que muchas de las reglas que en la actualidad existen no serían las más eficientes o pertinentes en la búsqueda del objetivo de la Ley.

La Ley Estatutaria establece la salud como un derecho fundamental de todo ciudadano, dejando en cabeza del Estado la dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control de la prestación de los servicios. Esta nueva concepción de servicios de salud comprende la igualdad de trato y oportunidades en el acceso para todas las personas, la universalidad del derecho a la salud y una visión integral y colectiva diferente al aseguramiento individual.

Uno de los principales cambios que introduce la Ley Estatutaria es la delimitación establecida al gasto en salud. De acuerdo con la Ley, los recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a financiar servicios y tecnologías con propósitos cosméticos, así como aquellos prestados en el exterior, los no autorizados

por la autoridad competente, los que se encuentren en fase de experimentación y los que carecen de evidencia científica sobre su seguridad, eficiencia y/o efectividad clínica. Dichos servicios y tecnologías deberán ser excluidos del plan de beneficios previo un procedimiento técnico—científico, de carácter público, colectivo, participativo y transparente. La Ley estableció un plazo máximo de dos años para la implementación de este nuevo plan de beneficios.

Otro cambio fundamental de la Ley Estatutaria está relacionado con la sostenibilidad del sistema. Dicha Ley conllevaría un esquema totalmente diferente al actual, lo que implicaría la necesidad de redefinir el financiamiento del sistema. Este nuevo esquema obligaría a modificar la metodología del cálculo de la UPC, en la medida en que este se realiza con base en los procedimientos, tecnologías y medicamentos incluidos en el plan de beneficios.

Igualmente, dado que a partir de la Ley se establece un esquema de afiliación única en salud se acentuaría el estímulo a pertenecer al régimen subsidiado, lo que también tendría efectos sobre el financiamiento del Sistema. Lo anterior sumado a que en ninguna parte de la Ley quedó claro cómo garantizar la prestación de servicios de salud para los individuos que carecen de recursos.

Frente a este nuevo panorama las recomendaciones de este capítulo están encaminadas a contribuir con la transformación que requiere el SGSSS, con el propósito de lograr un mayor acceso y calidad en la prestación de los servicios, mejorar la sostenibilidad financiera del Sistema y la eficiencia del sector a lo largo de la cadena productiva.

2. Ayala, J. (2014). La salud en Colombia: más cobertura pero menos acceso. Documentos de trabajo sobre economía regional. Bogotá, D.C.: Banco de la República.



No.	Recomendación	Plazo	Avance 2014	Observaciones avance 2014	Lo mínimo a realizar en 2015	Principales responsables
1	Generar los incentivos que mejoren el desempeño de los encargados de administrar el SGSSS.	Mediano		El Informe anterior propuso dividir el cálculo de la UPC con el propósito de generar incentivos a la competencia. Sin embargo, el nuevo esquema de la Ley Estatutaria delimita el cálculo de la UPC, lo que obligaría a modificar su metodología.	Establecer indicadores que permitan medir la oportunidad de los servicios, su calidad y eficiencia, así como los esfuerzos en materia de promoción y prevención.	Minsalud y DNP.
2	Fortalecer la capacidad de inspección, vigilancia y control a los diferentes actores del Sistema.	Corto		x	Contar con normatividad apropiada que permita implementar medidas de tipos correctivo y preventivo, así como de carácter sancionatorio.	Minsalud, Superintendencia Nacional de Salud y DNP.
3	Establecer mecanismos para blindar las instituciones del sector salud del clientelismo.	Mediano		Si bien en el Informe anterior se realizó esta recomendación, aún no ha tenido acogida.	Permitir que nombramientos como el del superintendente de salud y directores de instituciones relacionadas con el sector sean independientes del ciclo político.	Minsalud.
4	Tomar medidas correctivas que permitan fortalecer y, de ser necesario, aumentar el número de prestadores de servicios de salud en las regiones.	Mediano	x	x	Identificar los servicios más demandados a nivel regional y evaluar si están siendo suministrados oportunamente.	Minsalud, DNP y secretarías de salud departamentales y municipales.
5	Implementar alternativas de financiación diferentes a la nómina que permitan la sostenibilidad financiera del SGSSS: recursos del Presupuesto General de la Nación.	Mediano	x	x	Realizar una reforma tributaria estructural que permita incrementar los recursos y continuar reduciendo distorsiones como los impuestos a la nómina.	Minsalud, Minhacienda y DIAN.
6	Redefinir el plan de beneficios vía exclusiones, de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria.	Mediano		En el Informe anterior se recomendó redefinir el plan de beneficios a través de exclusiones, propuesta que fue acogida en la Ley Estatutaria.	Sancionar la Ley Estatutaria e identificar con claridad las exclusiones que tendría el nuevo plan de beneficios.	Minsalud, Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud e Instituto Nacional de Salud.
7	Establecer una agenda de transformación productiva que le permita al sector salud incrementar su competitividad y ofrecer servicios de calidad.	Mediano		Ciudades como Medellín, Barranquilla, Cali, Cúcuta y Bucaramanga han avanzado en el desarrollo de <i>clusters</i> de salud.	Incrementar las experiencias de trabajo de <i>clusters</i> de salud en los departamentos, identificar las principales restricciones y formular acciones para el desarrollo del sector en las regiones.	Minsalud, Mineducación, MinTIC y entes territoriales.



PENSIONES

El sistema pensional vigente en Colombia tiene baja cobertura, una gran desigualdad al interior del mismo y un enorme reto de garantizar su sostenibilidad financiera; todas características que dificultan tener un sistema pensional que esté en línea con la visión de competitividad del país.

Entre 2010 y 2014 el país ha aumentado el número de pensionados bajo el Sistema General de Pensiones (SGP) en un 6% promedio anual, lo que ha llevado a un aumento en la tasa de pensionados como porcentaje de la población mayor de 21,4% en 2010 a 23,6% en 2014. De continuar esta tendencia, en 2018 apenas 25,9% de la población mayor tendría acceso a una pensión.

La principal explicación de la baja cobertura del sistema pensional colombiano radica en la baja proporción de la población que cotiza a pensiones. En 2014 solamente 30,9% de la población que posee un empleo lo hace. Dos de las principales causas de esto son: la alta informalidad en el mercado laboral y las rigideces del SGP. Por el lado de la informalidad, en Colombia cerca de 70% de la población ocupada trabaja de manera informal, lo que implica que no cumple con las obligaciones prestacionales laborales, incluida la de cotización a pensiones.

Con respecto a rigideces del SGP, estas provienen de disposiciones constitucionales y legales relativas a las pensiones en el país. Si bien el decreto 2616

de 2013 modificó la base de cotización mínima, de manera que se permitan cotizaciones por semanas, sigue habiendo un mayor costo en el caso de trabajadores que trabajan por periodos inferiores a una semana. Por otro lado, sigue existiendo la restricción de que una pensión no puede ser inferior a un SMMLV. Esto excluye del SGP a una mayoría de trabajadores que ganan por debajo de este umbral.

En materia de avances cabe destacar lo logrado a través de los programas Colombia Mayor y BEPS. El programa Colombia Mayor ha tenido un crecimiento promedio de 27,1% en los últimos cuatro años, pasando de 482.000 cupos en diciembre de 2010 a 1.258.000 en 2014. Por su lado, los BEPS han tenido poca adopción. Al 6 de agosto de 2014 se han vinculado únicamente 6.312 personas.

La principal fuente de inequidad en el SGP la genera el esquema de subsidios que reciben los afiliados al Régimen de Prima Media (RPM). Por un lado, estos subsidios son exclusivos a este régimen, lo que hace que un trabajador con los mismos ingresos a lo largo de su vida laboral pero afiliado al Régimen de Ahorro Individual Solidario (RAIS) reciba una pensión menor. Por otro lado, al interior del RPM, los mayores subsidios los reciben las personas de mayores ingresos, vulnerando el principio de equidad vertical (o progresividad). Estos subsidios llegan a ser tan regresivos que el 20% más pobre de la población recibe el 0,1% del monto total de subsidios, mientras el 20% más rico recibe el 86,3%.

Además de los problemas de cobertura y equidad, el SGP presenta grandes vulnerabilidades en materia de sostenibilidad financiera. Estas vulnerabilidades se deben a varios factores. En primer lugar, los subsidios otorgados en el RPM que, además de generar una carga fiscal importante para el Gobierno, generan incentivos para la transferencia desde el RAIS hacia

el RPM, lo que evita el marchitamiento de este último. En segundo lugar, la falta de actualización paramétrica del sistema con base en la evolución de las variables demográficas, tales como la expectativa de vida. Entre 1993 y 2013 la esperanza de vida en Colombia ha aumentado alrededor de cinco años. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en un aumento de la edad requerida para acceder a una pensión — pues esta edad solo ha aumentado en dos años durante el mismo periodo. Por último, la inseguridad jurídica, pues reformas del pasado que atenuaban el monto de la deuda pensional han sido reversadas, vía nueva legislación que busca favorecer a ciertos grupos de la población o vía sentencias que modifican normas parcialmente, lo que genera desequilibrio en la financiación del sistema.

El cuadro a continuación resume las principales recomendaciones del Consejo Privado de Competitividad para mejorar el sistema pensional.



No.	Recomendación	Plazo	Avance 2014	Observaciones avance 2014	Lo mínimo a realizar en 2015	Principales responsables
1	Adoptar un sistema multipilar con pilar universal que busque aumentar la cobertura.	Mediano		x	Presentar reforma pensional.	Mintrabajo.
2	Disminuir el número de semanas requeridas para tener acceso a una pensión (descontada).	Mediano		x	Presentar reforma pensional.	Mintrabajo.
3	Universalizar la cobertura del programa Colombia Mayor e implementar los BEPS.	Corto		Se implementaron los BEPS y se ha aumentado la cobertura de Colombia Mayor.	x	Mintrabajo y Minhacienda.
4	Eliminar cualquier diferencial de beneficios entre el RPM y el RAIS.	Mediano		x	Presentar reforma pensional.	Mintrabajo.
5	Eliminar los subsidios para las pensiones altas.	Mediano		x	Presentar reforma pensional.	Mintrabajo.
6	Ajustar los parámetros pensionales, en concordancia con la expectativa de vida en el país.	Mediano		x	Presentar reforma pensional.	Mintrabajo.





MERCADO LABORAL Y FORMALIZACIÓN

El uso óptimo del factor trabajo es fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo social de un país. El desempleo y la informalidad son reflejos de una ineficiente asignación de este factor, al tiempo que son causa y resultado de la baja productividad de un país.

En los últimos cuatro años, el país ha avanzado en los indicadores de empleo y formalidad, aunque no al ritmo requerido para mejorar su desempeño en los *rankings* internacionales. Por ejemplo, en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, el país pasó del puesto 69 en 2010, al 84 en 2014 en el pilar Eficiencia del Mercado Laboral.

Colombia ha venido disminuyendo el desempleo de manera importante en los últimos cuatro años. A pesar de esto, el país aún tiene una de las tasas de desempleo más altas de la región, y si la reducción del desempleo continuara con la tendencia del período 2010-2014, en 2018 todavía se encontraría 3 puntos porcentuales por encima de lo que se espera sea el promedio de América Latina. Para lograr estar al menos al nivel del promedio latinoamericano en el año 2032 —año en el que aspira ser la tercera economía más competitiva de América Latina—, Colombia debería terminar 2018 con una tasa de desempleo de 5,4%, lo cual implicaría crear 1,5 millones de nuevos empleos.

De otro lado, el país tiene la segunda tasa de informalidad laboral más alta de

América Latina y aunque ha logrado disminuirla por debajo de 50%, de continuar a este ritmo sólo se alcanzaría una tasa de 46% en 2018. Para lograr la meta a 2032, la tasa de informalidad colombiana debería ser de 37% en 2018. Esto implicaría crear empleos formales para 2,7 millones de colombianos en los próximos cuatro años, sin que aumente el número de informales.

La Ley 1429 de 2010 (Ley de Formalización y Generación de Empleo) y la Ley 1607 de 2012 (Reforma Tributaria) redujeron sustancialmente los impuestos pagados por los empleadores asociados al salario y a la formalidad empresarial. A pesar de esto, los impuestos laborales y otras contribuciones siguen siendo más altos en Colombia que en países de referencia. Más aún, el país tendría el reto de reducir a la mitad sus impuestos laborales si se quisiera ubicar en el tercer puesto entre los países latinoamericanos. Además, la informalidad empresarial sigue presentando brechas importantes más allá del tema laboral.

Durante el período 2010-2014, los incrementos del salario mínimo fueron consistentemente superiores a los que sugiere la teoría económica y, de continuar esta tendencia, en 2018 el salario mínimo tendría un sobreprecio de 14% frente a lo que se proyectaría teniendo en cuenta exclusivamente la inflación y los cambios en productividad laboral. Sin embargo, incluso ajustando el salario mínimo únicamente teniendo en cuenta el salario mínimo y la productividad laboral, la relación entre el salario mínimo y el salario promedio se habría situado alrededor de 56%, cuando la literatura recomienda que esta relación no debería superar un 25%.

Adicional a los altos costos de la formalidad y a la existencia de un salario mínimo alto, existen al menos otros dos tipos de inflexibilidades que generan distorsiones en el mercado laboral. En pri-

mer lugar, aquellas relacionadas con los procesos de contratación y despido de trabajadores y, en segundo lugar, aquellas que dificultan la movilidad laboral entre sectores económicos. En general, Colombia se encuentra bien calificada en los índices que miden el primer tipo de distorsiones, mientras presenta rezagos en cuanto a la movilidad, en particular por el bajo desarrollo en la consolidación del Sistema de Certificación de Competencias Laborales.

Por último, el país debe ir más allá del tema normativo y atacar los problemas de empleo e informalidad de manera estructural. Sin embargo, hasta ahora el enfoque de la política se ha basado en la creencia de que la relación entre informalidad y productividad es unidireccional y en el sentido “la informalidad conduce a menores niveles de productividad”. Sin embargo, es urgente que el país entienda que la relación entre estas dos variables es bidireccional, de tal forma que muchas empresas siguen en la informalidad, precisamente porque sus niveles de productividad no les dan para cubrir los costos asociados a la formalidad.

El capítulo presenta una serie de recomendaciones, las cuales se resumen en el siguiente cuadro.



Cuadro. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Mercado Laboral y Formalización.



No.	Recomendación	Plazo	Avance 2014	Observaciones avance 2014	Lo mínimo a realizar en 2015	Principales responsables
1	Realizar una evaluación del impacto de las cajas de compensación y replantear los mecanismos de financiación de las mismas.	Largo		El Gobierno audita los presupuestos de las cajas y ahora estos se incluyen en el PGN.	Realizar una evaluación de impacto de las cajas de compensación y un estudio de fuentes alternativas de financiación para las mismas.	Minhacienda y UGPP.
2	Sujetar el incremento del salario mínimo a la inflación hasta que se reduzca la relación entre salario mínimo y salario promedio.	Mediano		x	Crear mecanismos para que el salario mínimo no crezca más allá de la inflación en períodos de decrecimiento de la productividad laboral.	Mintrabajo.
3	Crear mecanismos de salario mínimo diferenciado.	Mediano		Se pasó de pagar 75% del SMMLV a los aprendices con contrato de aprendizaje a pagar el 100%.	Debatir a nivel nacional y regional la posibilidad de tener un salario mínimo diferencial por departamentos. Explorar salarios diferenciados por edades.	DNP.
4	Fortalecer el sistema de Inspección, Vigilancia y Control y establecer reglas claras sobre el uso de esquemas de contratación flexibles.	Mediano		x	Encontrar la forma legal de integrar los sistemas de información de las diferentes entidades de inspección, vigilancia y control.	DIAN, UGPP, SIC, Mintrabajo, MinCIT y Confecámaras.
5	Reglamentar el artículo 171 de la Ley 1450 de 2011: cotización por períodos inferiores a un mes.	Corto		Se reglamentó la cotización a seguridad social por semanas, la cual es un avance, pero sigue presentando inconvenientes.	Explicar la posibilidad de que la cotización se haga por días.	Mintrabajo.
6	Implementar la Estrategia de Gestión del Recurso Humano (Conpes 3674 de 2010): fortalecimiento del Sistema de Certificación de Competencias Laborales y construcción de un Marco Nacional de Cualificaciones.	Largo		Se redactó el proyecto de decreto por el cual se organiza el Esquema de Certificación de Competencias.	Organizar el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales en concordancia con el trabajo que realiza el Ministerio de Educación Nacional en la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones. Iniciar la normalización de acuerdo con las necesidades de formación y certificación de las apuestas productivas del país y las regiones.	Mintrabajo y Mineducación.
7	Refocalizar la estrategia de Generación de Ingresos para la PPEP y articular con los esfuerzos de cierre de brechas de capital humano para los sectores a los que le está apostando el país.	Mediano		Se adaptaron las metodologías de la Red ORMET para realizar estudios de identificación de brechas de capital humano (actuales y futuras) en el marco de las apuestas productivas regionales.	Publicar y difundir Lineamientos para la identificación y abordaje de brechas de capital humano a nivel sector-región a través del SNCel, las Comisiones Regionales de Competitividad y la Red ORMET.	CPC, MinCIT, Confecámaras, DNP y Alta Consejería para la Competitividad.
8	Crear una estrategia "integral" para atraer el capital humano residente en el exterior que el país requiere y que no está siendo formado interiormente.	Corto				
9	Implementar un modelo de formalización y fortalecimiento empresarial que tenga en cuenta las apuestas productivas del país y sus regiones.	Mediano		Se terminó la construcción del modelo de formalización y fortalecimiento empresarial.	Difusión e implementación del modelo de formalización y fortalecimiento empresarial diseñado por BID-FOMIN y cámaras de comercio.	Cámaras de Comercio - Comisiones Regionales de Competitividad.

MERCADO LABORAL Y FORMALIZACIÓN

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

Avance satisfactorio

Avance con retrasos

Sin avances o retrasos significativos

No aplica



CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

La Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTel) son elementos esenciales para generar crecimiento económico y competitividad en el largo plazo.

La inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) que realizan los diferentes actores del país presenta niveles muy bajos, inclusive si se tienen en cuenta los recursos de regalías destinados a CTel. Entre 2010 y 2013 la inversión en ACTI pasó de 0,5% a 0,66% del PIB. Los recursos aprobados de las regalías en proyectos de ACTI son los principales responsables de este incremento, pues representaron un 0,12% y un 0,16% del PIB en 2012 y 2013, respectivamente. Si se excluyen las regalías, la inversión en ACTI del país se mantuvo alrededor del 0,5% del PIB entre 2010 y 2013.

Para que Colombia alcance el nivel promedio de inversión en ACTI de América Latina y el Caribe en 2032, el cual se estima en el 2,6% del PIB, esta inversión en el país debe crecer a una tasa promedio anual del 7,5% entre 2014 y 2032. No obstante, se estima que para el año 2018, la inversión en ACTI colombiana permanecería en el 0,66% del PIB si continúan las tendencias vistas entre 2010 y 2013. Este estancamiento implica que para 2018, la inversión en ACTI del país solo representaría 70% del nivel de inversión requerido (0,95% del PIB) para poder alcanzar el nivel promedio de la región en 2032.

Colombia se ha caracterizado por contar con un número muy bajo de investigadores por cada millón de habitantes. En efecto, en 2011 el país tuvo 346 investigadores por cada millón de habitantes, lo que lo ubica en el noveno puesto entre los 13 países iberoamericanos para los cuales está disponible este indicador. De acuerdo con estimaciones del Consejo Privado de Competitividad (CPC), el país debe incorporar 17.000 investigadores en el próximo cuatrienio para comenzar a cerrar decididamente las brechas con relación a países de la región. No obstante, si las tendencias continúan, el país solo tendría alrededor de 5.000 investigadores adicionales entre 2015 y 2018.

En cuanto a la calidad gerencial de las firmas, Colombia es el país peor calificado en esta materia en la encuesta *World Management Survey*, llevada a cabo por el London School of Economics, el Banco Mundial y el Departamento Nacional de Planeación, por detrás de Brasil, Chile, Argentina, México y otros países de referencia. Adicional al mal desempeño, es diciente que Colombia presente la mayor diferencia entre la autocalificación y el resultado de la encuesta, lo que implica que se deben realizar esfuerzos significativos para sensibilizar al sector privado sobre la existencia de estas brechas.

A juicio del CPC, existen oportunidades significativas para incrementar la eficacia de la inversión en CTel. El país continúa sin definir una política de CTel con objetivos de largo plazo en cuanto a su aporte a la sofisticación y diversificación de la economía y no cuenta con una institucionalidad robusta que haga seguimiento a avances y que tome las decisiones de política necesarias. La ausencia de objetivos claros y definidos de política pública en el mediano y el largo plazo ha dificultado seriamente la capacidad de esta para adoptar un enfoque sistémico y coordinado. Así, el país todavía no cuenta con una estruc-

tura efectiva que permita alinear a los diferentes agentes públicos y privados en iniciativas de calado que generen impactos positivos en la productividad y la sofisticación del aparato productivo nacional a través del aprovechamiento de ventajas competitivas locales.

La desarticulación también es una característica de la ejecución de la inversión pública, pues se ha identificado un número exagerado de instrumentos (convocatorias, líneas de crédito, entre otros) con presupuestos sumamente bajos, poca focalización de los instrumentos y necesidades de las firmas sin atender por parte de la oferta de instrumentos. Lo anterior se puede concluir a partir de un levantamiento de información de 134 instrumentos de promoción a la CTel ejecutados entre 2010 y agosto de 2014, por un valor de \$7,5 billones.

Por lo tanto, este capítulo enfoca sus recomendaciones en tres áreas claves: i) flujos de inversión en ACTI, ii) disponibilidad de capital humano calificado para llevar a cabo ACTI, e iii) institucionalidad del sistema de CTel en el país. El resumen de las recomendaciones incluidas en este capítulo se encuentra en el siguiente cuadro.

Cuadro. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación.



No.	Recomendación	Plazo	Avance 2014	Observaciones avance 2014	Lo mínimo a realizar en 2015	Principales responsables
1	Culminar proceso de reestructuración de Colciencias.	Corto		La reestructuración de Colciencias continúa sin terminar por motivos presupuestales y por los cambios en la Dirección General de Colciencias.	Decretos de estructura administrativa y planta de personal publicados, proceso de contratación de personal en ejecución.	Colciencias y Minhacienda.
2	Definición de objetivos estratégicos comunes para el Sistema de Competitividad e Innovación y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, con un enfoque de <i>smart specialization</i> .	Mediano		El Comité Técnico Mixto de Innovación del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación comenzó a preparar las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en materia de ciencia, tecnología e innovación.	Objetivos definidos, incluyendo metas anuales de cumplimiento. Definición de conjunto de indicadores para evaluar desempeño de la política.	Entidades del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación.
3	Definición de roles y responsabilidades de cada entidad gubernamental que contribuyan a alcanzar los objetivos definidos.	Mediano			Roles y responsabilidades definidas. Ejecución del presupuesto de inversión 2015 debe ser consistente con dichos roles y responsabilidades.	Entidades del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación.
4	Sistema de información unificado de beneficiarios.	Mediano		No se evidenciaron avances al respecto.	Plan de acción para implementar el sistema, el cual debe incluir la definición de requerimientos de información y requisitos técnicos.	Colciencias.
5	Incrementar inversión de las entidades gubernamentales en actividades de ciencia, tecnología e innovación.	Largo	A la espera de aprobación del Presupuesto General de la Nación 2015, por parte del Congreso de la República.		Marco de inversión en CTel del cuatrienio 2015-2018, con presupuesto del Gobierno nacional de \$17,7 billones (incluidos los recursos de Regalías destinados a CTel).	Entidades del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y Minhacienda.
6	Programa de atracción de capital humano especializado residente en el exterior.	Mediano		Programa "Es tiempo de volver" en ejecución con presupuesto de \$17.200 millones.	Fortalecimiento del Programa "Es Tiempo de volver" con los siguientes cambios: i) incremento del presupuesto; ii) ampliación a investigadores extranjeros, entre otros.	Colciencias.
7	Ventanilla única de acceso a instrumentos públicos.	Mediano		Versión beta del portal lanzado (portaldeinnovacion.gov.co).	Versión definitiva del portal lanzada con mejoras provenientes de un estudio de demanda.	Entidades del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.
8	Programa para fomentar emprendimiento corporativo.	Mediano		Innpulsa comenzó análisis sobre el emprendimiento corporativo.	Propuesta técnica de instrumentos, incluyendo población objetivo y costo fiscal.	Innpulsa.
9	Modificaciones a los beneficios tributarios a la ciencia, la tecnología y la innovación.	Mediano		Se expidió Decreto 121 de 2014 con el reglamento de funcionamiento del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios.	Cambios de Ley aprobados por el Congreso de la República con respecto a: i) presentación directa de proyectos por parte de las empresas; ii) inclusión de proyectos de innovación; iii) incremento del porcentaje de deducción a 200%; y iv) inclusión del crédito fiscal como mecanismo para obtener el beneficio.	Colciencias y demás entidades del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios.
10	Esquema de contrapartidas para CTel.	Corto	x	x	Esquema de contrapartida definido técnicamente y listo para implementarlo a partir del segundo semestre de 2015.	Colciencias, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
11	Estrategia de cultura de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento.	Largo	x	x	Diseño de Estrategia comprensiva y coordinada que contenga acciones como: i) promoción de universidades y centros de investigación orientados hacia la innovación; ii) creación de un programa integral de innovación abierta; iii) creación y consolidación de oficinas de transferencia tecnológica regionales; entre otros.	Entidades del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación.

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.



Avance satisfactorio



Avance con retrasos



Sin avances o retrasos significativos



No aplica



DESEMPEÑO LOGÍSTICO: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

La logística se convierte en un factor fundamental para competir tanto en los mercados nacionales como en los internacionales. El buen desempeño logístico comprende un conjunto de variables –como infraestructura, competitividad y calidad en servicios de transporte; eficiencia y eficacia en aduanas y puertos; capacidad de seguimiento y localización de mercancías, entre otros–, que permiten optimizar los tiempos y costos de transporte, almacenamiento y distribución, desde la fase de suministro hasta el consumidor final.

El desempeño logístico del país durante los últimos años se ha deteriorado drásticamente. De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, Colombia pasó del puesto 72 entre 155 países en 2010, al puesto 97 entre 160 países en 2014. Esto significa que mientras en 2010, el 46,5% de los países tenían un mejor desempeño logístico que Colombia, en 2014 lo tienen más del 60%. En el contexto latinoamericano, el país sólo está por encima de Honduras, Haití y Bolivia.

El bajo desempeño logístico del país también se evidencia cuando se comparan sus costos logísticos frente a estándares internacionales. De acuerdo con el último informe del *Doing Business*, los costos de exportación e importación de Colombia entre 2010 y 2013 se incrementaron 5,9% y 9,8% en promedio

anual, respectivamente. Los elevados costos se deben en gran parte a los costos de transporte, los cuales en el caso de las exportaciones representaron más del 65% del total en 2013. En el contexto latinoamericano el país registra altos los costos de transporte. Para igualar a Chile –tercer país con los costos más competitivos de América Latina–, se requiere reducir los costos de exportación en más del 58%. En otras palabras, para alcanzar en 2032 los costos de exportación que hoy tiene Chile, Colombia debe reducirlos en promedio 4,5% por año entre 2014 y 2018.

Parte del bajo desempeño logístico del país se debe al rezago en materia de infraestructura. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, mientras en el Reporte Global de Competitividad 2010-2011, 69,8% de los países estaban en una mejor posición que Colombia en materia de calidad de la infraestructura, en el último reporte (2014-2015) este porcentaje se incrementó a 75%, lo que ubica el país en el puesto 108 entre 144 países y en el puesto 13 en el contexto latinoamericano.

Si bien se evidencia un deterioro en materia de calidad de la infraestructura del país frente a referentes internacionales, lo cierto es que durante el período 2010-2014 se han realizado distintos esfuerzos para contrarrestar dicho rezago. Por primera vez la inversión superó el 1% del PIB llegando en 2013 a representar 2,8% del PIB. Así mismo, la creación de instituciones como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la nueva Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y la Comisión Intersectorial de Infraestructura, son un claro ejemplo de fortalecimiento institucional. Igualmente, se expidieron diferentes normas que facilitan la implementación de proyectos de infraestructura – como la Ley de 1508 de 2012 sobre Asociaciones Público Privadas y la Ley 1682 de 2013 o Ley de Infraestructura.

Los retrasos en infraestructura y la baja calidad de la misma no son los únicos factores que explican el bajo desempeño y los altos costos logísticos. Esta situación también se debe a otros cuellos de botella cuyo abordaje en el corto plazo podría traer grandes beneficios para la competitividad logística del país. Por ejemplo, la carencia de un sector de transporte y de una cadena logística que preste servicios competitivos es otra de las grandes restricciones que afectan el desempeño logístico del país. Esta situación se evidencia en la productividad laboral del sector, la cual es bastante baja en el contexto internacional. Entre 2005 y 2012, la productividad relativa del sector de transporte en Colombia no superó el 17% de la productividad del mismo sector en Estados Unidos.

Entre los factores que explican esta falta de competitividad del sector transporte están: exceso de regulación en algunos casos y en otros falta de la misma, antigüedad del parque automotor, alta informal, falta de verdaderos esquemas de gestión, falencias en materia de capital humano, falta de una agenda de ciencia, tecnología e innovación contundente para el sector, poca coordinación de mediano plazo entre generadores y transportadores, escaso uso de herramientas para la optimización logística, entre otros.

Igualmente, la no utilización de diferentes modos de transporte, la carencia de plataformas logísticas, así como la falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos son causas también del bajo desempeño logístico.

A continuación se presentan las principales recomendaciones en la materia.

Cuadro. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Desempeño Logístico: Infraestructura, Transporte y Logística.



No.	Recomendación	Plazo	Avance 2014	Observaciones avance 2014	Lo mínimo a realizar en 2015	Principales responsables
1	Reglamentar artículos pendientes de la Ley de Infraestructura (Ley 1682/2013) e implementarla.	Corto		Al cierre de este informe siguen algunos artículos pendientes.	Implementar en su totalidad la Ley de Infraestructura.	Mintransporte, ANI, Minhacienda y DNP.
2	Reglamentar el proceso de consulta previa a comunidades.	Corto		A la fecha no se ha reglamentado dicho proceso.	Reglamentar el proceso de consulta previa.	Mininterior.
3	Implementar la agenda de infraestructura incluida en el programa 4G.	Largo		x	Adjudicar al menos 90% de los proyectos de la primera y segunda ola.	ANI y Mintransporte.
4	Ofrecer una remuneración apropiada que cubra los riesgos de invertir en proyectos de infraestructura y atraer la participación de inversionistas institucionales.	Mediano		Aunque se han reducido los riesgos financieros en la construcción, operación y mantenimiento, persisten otros riesgos.	Lograr incrementar la inversión privada en más de 1,3% del PIB.	ANI, FDN, Mintransporte y DNP.
5	Convertir el sector de transporte de carga en un sector de talla mundial.	Largo		El año pasado se recomendó transferir la metodología del Programa de Transformación Productiva al Mintransporte para que se encargara de coordinar la elaboración e implementación de un plan de negocios que buscara elevar la competitividad del sector. En materia regulatoria, se recomendó eliminar ciertas regulaciones que limitan la competitividad del sector. Ninguna recomendación fue acogida.	Diseñar e implementar una agenda integral para elevar la competitividad del sector. Eliminar regulaciones que limitan la competitividad del sector, tales como el establecimiento del esquema de libertad vigilada, el congelamiento del parque automotor y la limitación al uso de bitrenes. Reglamentar la edad máxima de los vehículos de carga. Implementar el sistema de peajes electrónicos.	Mintransporte.
6	Diseñar e implementar una política de transporte multimodal.	Largo		El año pasado se recomendó elaborar un documento Conpes que tuviera en cuenta la priorización de corredores logísticos e identificación de los cuellos de botella que limitaran la inter y multimodalidad. Aunque dicho documento no fue realizado, son distintos los avances en la materia.	Priorizar los corredores logísticos de importancia estratégica para el país con base en el Plan Estratégico de Infraestructura Intermodal de Transporte y establecer acciones concretas que permitan llevarlo a cabo.	Mintransporte y DNP.
7	Implementar la Política Nacional Logística y atraer al sector privado a que invierta en el establecimiento de plataformas logísticas.	Mediano		Se recomendó agilizar el proceso de estructuración y puesta en marcha de los estudios para ciertas plataformas logísticas. Aunque ya se conocen los resultados de éstos, aún no se ha estructurado el primero.	Agilizar la implementación de la plataforma de Buenaventura. Reglamentar y agilizar los procesos de estructuración de las plataformas que cuentan con estudios.	Mintransporte, DNP y ANI.
8	Facilidades en los trámites de comercio exterior y eficiencia en puertos y aeropuertos.	Mediano		La consolidación de la VUCE no está al 100%. Aún se encuentra en espera la reglamentación e implementación de los <i>scanners</i> . No se ha masificado la figura del Operador Económico Autorizado (OEA).	Implementar el proceso de inspección simultánea para la exportación en todos los tipos de carga. Reglamentar la definición de los <i>scanners</i> e implementación de los mismos. Agilizar la masificación de la figura del OEA.	Presidencia de la República, Mintransporte, DNP, MinCIT y DIAN.
9	Diseñar un plan de inversiones en infraestructura óptimo y coherente de acuerdo con las necesidades de cada región y con base en la planeación de la red nacional.	Largo	x	x	x	Gobiernos locales, Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte y DNP.
10	Reducir los problemas de congestión vehicular en las áreas urbanas.	Mediano	x	x	Permitir que la Nación tenga competencia para resolver los accesos de la red nacional en las áreas urbanas.	Gobiernos departamentales y locales, Mintransporte y Presidencia de la República.

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

Avance satisfactorio

Avance con retrasos

Sin avances o retrasos significativos

No aplica



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son una herramienta determinante para el desarrollo económico y social de un país. De acuerdo con la UIT, un aumento de 10% en la penetración de internet de banda ancha podría traducirse en un incremento de la tasa de crecimiento del PIB de entre 0,25% y 1,38%. Así mismo, se ha reconocido que las tecnologías y la banda ancha son factores clave para el logro de los principales objetivos del milenio.

En el marco de la agenda horizontal de competitividad, el acceso y apropiación de la tecnología y la banda ancha por parte de la sociedad, el gobierno y las empresas, es indispensable para elevar la productividad. Adicionalmente, en el marco de la agenda vertical, las TIC se convierten en impulsores del proceso de transformación productiva de los sectores o el mismo sector de las TIC puede surgir como apuesta productiva con esfuerzos deliberados para su potenciamiento.

El Plan Vive Digital del Ministerio de las TIC (MinTIC) durante el período 2010-2014, se propuso la masificación del uso de internet y otros servicios de conectividad para el país. De esta forma, se logró cuadruplicar el número de usuarios de internet —casi todos ellos con internet fijo banda ancha o 3G— y mantener una cobertura casi total de telefonía móvil.

No obstante los avances, el país continúa teniendo rezagos significativos en

cuanto a la velocidad promedio del servicio de internet y las dificultades de acceso a los servicios. Aunque los costos de los equipos son relativamente bajos, por la exención al IVA y aranceles, los costos de acceso a servicios son aún relativamente altos, por lo que se deberían reducir las tarifas entre un 20% y un 40% en los próximos 4 años.

De nada sirven los esfuerzos por aumentar la oferta de infraestructura y servicios si no se fomenta su apropiación en la sociedad, lo cual depende de las habilidades de la población y de los niveles de uso de la tecnología. En primer lugar, en Colombia, entre 2010 y 2013, el porcentaje de individuos que usan internet pasó de 36,5% a 51,7%. Sin embargo, el mayor cambio se dio entre 2010 y 2012, pues posteriormente hubo una desaceleración de esta tasa.

En segundo lugar, el uso de las TIC en el sector educativo se caracterizó por el incremento de equipos en colegios, logrando llevar computadores o tabletas a todas las sedes educativas públicas del país, pasando de tener 20 estudiantes por computador en 2010, a sólo 10 estudiantes por equipo en 2014. Sin embargo, no se ha observado ningún impacto de estas acciones en la educación y se ha visto un deterioro en la percepción de la conectividad en las escuelas.

En tercer lugar, contrario al caso educativo, el Gobierno ha reconocido la importancia de incorporar las TIC a lo largo y ancho del sector público, con el fin de mejorar la eficiencia del Estado. En el Índice de Preparación Tecnológica 2014 del WEF, Colombia se ubicó en el puesto 31 entre 148 países en el subpilar de Uso de las TIC en el Gobierno, y en el Índice de Gobierno Electrónico, el país ocupó el puesto 50 en 2014, y se ubicó dentro del grupo de los países con un índice de Gobierno Electrónico *Alto*.

Por último, en el marco de la política de desarrollo productivo, las TIC tienen

una doble función. La primera, procurando que todas las empresas y *clusters* o sectores priorizados adopten las TIC como parte esencial de sus negocios. En esto se ha avanzado, logrando que en diciembre de 2013 el 60% de las mipymes estuvieran conectadas a internet. Sin embargo, no es clara la articulación del sector con otros sectores en el marco de una política de este tipo y estudios recientes muestran que la apropiación de las nuevas tecnologías en los negocios en Colombia revela grandes brechas en términos internacionales y les aleja de su frontera eficiente de producción.

La segunda, entendiendo el sector de las TIC como apuesta productiva que se manifiesta a través de una gran cantidad de iniciativas *cluster* que apuntan a dinamizar y convertir el sector en una industria de talla mundial. Es importante la cantidad de esfuerzos por corregir fallas de mercado que impiden un mejor desempeño del sector, pero estos requieren estar articulados y lograr el compromiso de distintas entidades del nivel nacional y regional, lo cual no depende de un único ministerio.





No.	Recomendación	Plazo	Avance 2014	Observaciones avance 2014	Lo mínimo a realizar en 2015	Principales responsables
1	Mejorar el servicio de internet móvil banda ancha en el país y aumentar coberturas regionales.	Corto		Se tiene cobertura 3G total.	Garantizar cobertura de 4G en todas las ciudades capitales del país y municipios con más de 100 mil habitantes. Modificar la definición de internet de banda ancha, de acuerdo a la que utiliza el Barómetro de Cisco (2Mbps). Permitir que las conexiones prepago puedan considerarse como banda ancha. Mantener los beneficios arancelarios que permiten mantener bajo el costo de los dispositivos.	MinTIC, ANE y CRC.
2	Potenciar el esquema de entrega de vivienda nueva con conexión a internet para la población de estratos 1 y 2.	Largo		Se firmó la entrega de 125.000 nuevas viviendas en 2013.	Diseñar con los proveedores de servicios una estrategia que permita la sostenibilidad en el acceso a los servicios de internet para los estratos bajos. Promover esquemas por demanda y prepago.	MinTIC y Minvivienda.
3	Impulsar el entendimiento de la utilidad de las TIC en sectores productivos.	Mediano		Se incluyeron estrategias en el nuevo Plan Vive Digital, pero no se han implementado.	Articular las estrategias del Plan Vive Digital con MinCIT y Cámaras de Comercio, como estrategia integral de fortalecimiento empresarial.	MinTIC, MinCIT y Cámaras de Comercio.
4	Implementar un sistema de identificación digital en el país.	Largo		x	Contratar el diseño de un plan de acción para la puesta en marcha del sistema de registro digital.	Registraduría, DIAN, MinTIC, Minsalud y Mintrabajo.
5	Adoptar el uso de <i>Big Data</i> en el Gobierno nacional y los Gobiernos locales para reducir costos administrativos y fomentar la toma de decisiones informada.	Mediano		Se ha incluido el tema e <i>Big Data</i> dentro de Plan Vive Digital, al igual que el tema de Ciudades Inteligentes.	Implementar proyectos piloto de <i>Smart City</i> . Promover iniciativas de <i>Open Data</i> en el Gobierno y mejorar las capacidades de hacer análisis basados en <i>Big Data</i> .	MinTIC y Gobiernos locales.
6	Acelerar la implementación de las acciones propuestas en la Agenda de Innovación del Nodo de Salud.	Mediano		Ver capítulo Salud.		
7	Articular el trabajo sobre las apuestas productivas del país -tanto del nivel nacional como local- con los esfuerzos para desarrollar el sector TIC.	Mediano		Se ha definido la Visión Estratégica del Sector en varias regiones del país.	Institucionalizar la participación del sector de las TIC como eje de apoyo a las apuestas productivas del país y las regiones, en el marco de la política de desarrollo productivo.	Comité Técnico SNCel, Comisiones Regionales de Competitividad, MinTIC y MinCIT.
8	Definir e implementar una política de TIC en educación que integre el acceso, la formación del docente en el uso de las TIC para educar, los ambientes de aprendizaje, la definición de contenidos, etc.	Corto	x	x	Lograr una articulación entre el Mineducación y el MinTIC en el marco de una política liderada por el Mineducación. Extender la política de masificación de terminales en las aulas enfocada en el maestro e integrada a un plan de formación docente.	Mineducación, MinTIC, ICIFES y Computadores para Educar.



SISTEMA FINANCIERO

Colombia cuenta con un sistema financiero sólido y estable, que ha avanzado de manera significativa en el aumento del acceso a productos financieros, a través de una expansión de los puntos de contacto financieros en todo el territorio nacional.

En 2013 el número de puntos de contacto por cada 10.000 adultos fue 114,9, un 33% superior al número alcanzado en 2012 (86,3 puntos de contacto por cada 10.000 adultos) y 2,5 veces mayor al registro de 2008 (46,4 puntos de contacto por cada 10.000 adultos).

Esta expansión de la cobertura de los puntos de contacto entre las instituciones financieras y los consumidores ha ido de la mano de un incremento en el índice de bancarización, medido como el porcentaje de adultos que tiene al menos un producto financiero. Este índice aumentó 4,3 puntos porcentuales en 2013 y alcanzó un nivel de 71,5%.

A pesar de lo anterior, el país todavía enfrenta serios desafíos en materia de utilización efectiva de los productos financieros. Por ejemplo, es preocupante que en 2013 el 51% de las cuentas de ahorro estuvieron inactivas, lo que implica que por un período de al menos seis meses, no se realizó ningún tipo de transacción a través de las mismas. El país ha desmejorado en esta materia, pues en 2009 este porcentaje fue de 47% y se alcanzó un mínimo de 42% en 2011.

Se destaca que el crédito doméstico dirigido al sector privado representó 48,8% del PIB en 2012, 4,1 puntos porcentuales por encima del nivel alcanzado en 2011 (44,7%). En la última década el crédito al sector privado como porcentaje del PIB creció 7,0% compuesto anual, tasa de crecimiento únicamente superada en la región por Paraguay (11,2%), Venezuela (11,1%), y Brasil (9,1%). Es necesario incrementar el acceso al financiamiento por parte de las pequeñas y medianas empresas (pymes). De acuerdo con el Banco Mundial, 53,1% de las pymes colombianas tuvieron crédito en 2010, lo que ubicó al país en el séptimo puesto entre 17 países latinoamericanos con información disponible.

Por su parte, el desarrollo del mercado de capitales del país es limitado con relación a países de referencia, a pesar de su dinamismo de los últimos años. Por un lado, en 2012 solo 76 compañías estaban listadas en la Bolsa de Valores, lo que ubica al país por debajo de Brasil (353), Chile (225), Perú (213), México (131), y Argentina (101). La deuda del sector privado (tanto interna como externa) también presenta rezagos en relación con países latinoamericanos de referencia.

El capítulo también describe el comportamiento de los fondos de capital privado y de *venture capital* en el país. Colombia cuenta actualmente con 54 fondos con compromisos de capital de US\$5.700 millones, de los cuales han sido invertidos más de US\$3.800 millones en alrededor de 390 empresas y proyectos en Colombia.

En cuanto a la educación económica y financiera, se concluye que el reto del país en este campo es significativo, debido al mal desempeño en las pruebas PISA sobre educación financiera. Colombia ocupó el último lugar entre 18 países y su calificación fue 24% inferior a la calificación promedio de los países de la

OCDE. Adicionalmente, 56,5% de los estudiantes colombianos está en el nivel 1 o menos, lo que implica que en el mejor de los casos, más de la mitad de los estudiantes del país escasamente es capaz de identificar productos y conceptos financieros básicos.

Finalmente, el capítulo concluye que si bien el margen de intermediación y los costos de envío de US\$200 a diferentes países de Colombia no son de los más altos de la región, existe espacio para mejorar el funcionamiento del sistema financiero y así incrementar su contribución a la competitividad del país.

En este contexto, el capítulo presenta recomendaciones que, a juicio del CPC, contribuirían a fortalecer el funcionamiento de este sistema. Entre estas recomendaciones se destaca la necesidad de incrementar la independencia de la Superintendencia Financiera de Colombia; el desarrollo de una política de promoción del mercado de capitales de largo plazo; la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera; y la eliminación o modificación de regulaciones que distorsionan el funcionamiento de este mercado. El resumen de estas recomendaciones se encuentra en el siguiente cuadro.



Cuadro. Resumen: Principales recomendaciones relacionadas al Sistema Financiero.



No.	Recomendación	Plazo	Avance 2014	Observaciones avance 2014	Lo mínimo a realizar en 2015	Principales responsables
1	Ley para definir períodos fijos para el Superintendente Financiero y para establecer razones explícitas para su remoción.	Corto		No se evidenciaron avances al respecto.	Aprobación de la Ley por parte del Congreso de la República.	Minhacienda y SFC.
2	Ley para regular a compañías <i>holding</i> de instituciones financieras.	Corto		No se evidenciaron avances al respecto.	Aprobación de la Ley por parte del Congreso de la República.	Minhacienda y SFC.
3	Estrategia para cerrar brechas regionales en cobertura de puntos de contacto.	Mediano	x	x	Estrategia con objetivos y líneas de acción definida y en implementación.	Minhacienda, Banca de las Oportunidades y SFC.
4	Implementación de Ley de Garantías Mobiliarias.	Mediano		Se expidieron decretos reglamentarios y se puso en marcha el registro electrónico centralizado de garantías.	Estrategia de comunicación y divulgación hacia pymes y entidades financieras implementada. Evaluación de utilización de garantías mobiliarias e identificación de cambios regulatorios necesarios para potenciar utilización.	Minhacienda, SFC y Supersociedades.
5	Política de promoción del mercado de capitales.	Mediano		A pesar de los avances regulatorios como la flexibilización de requerimientos para el Segundo Mercado, no se evidencian avances tangibles en el diseño e implementación de una política de promoción del mercado de capitales comprensiva y de largo plazo.	Documento Conpes aprobado que contenga la política de promoción del mercado de capitales.	Minhacienda, SFC y DNP.
6	Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera.	Corto		Se considera que existe retrasos importantes pues solo se conformó la Comisión Intersectorial de Educación Económica y Financiera.	Estrategia con objetivos, líneas de acción y presupuestos definidos, de acuerdo con buenas prácticas internacionales. Incorporar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como miembro de la Comisión con voz y voto.	Entidades de la Comisión Intersectorial de Educación Económica y Financiera.
7	Eliminación o modificación de regulaciones que imponen costos innecesarios a los productos financieros o que restringen la competencia en el sistema financiero.	Largo		Aunque se ha avanzado en la implementación de regulaciones para viabilizar la entrada de productos innovadores y de menor costo (como el proyecto de Ley de Inclusión Financiera), no se evidenciaron avances sobre la eventual modificación o eliminación de regulaciones existentes que generan sobrecostos al sistema financiero (GMF, límites a la tasa de interés, inversiones forzosas, monopolio del Banco Agrario sobre recaudo de depósitos judiciales, entre otras).	Documento de análisis costo-beneficio sobre las regulaciones identificadas. Con respecto a los límites de tasa de interés se espera que por lo menos se establezcan límites diferenciados para los créditos comerciales y para los créditos de consumo. Con respecto al GMF, se recomienda su no extensión en el tiempo debido a su efecto negativo sobre la inclusión financiera.	Minhacienda, SFC y SIC.

SISTEMA FINANCIERO

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

Avance satisfactorio

Avance con retrasos

Sin avances o retrasos significativos

No aplica



SISTEMA TRIBUTARIO

Un sistema tributario equitativo, progresivo y eficiente –principios contenidos en la Constitución Nacional– juega un papel clave en la competitividad de un país. En este sentido, el gran reto del sistema tributario colombiano es minimizar las distorsiones que impone la introducción de impuestos, para lograr mayor equidad –tanto vertical como horizontal– y estabilidad de las finanzas públicas.

En la pasada reforma tributaria [Ley 1607 de 2012], el Gobierno nacional desaprovechó la oportunidad de incrementar los recursos fiscales. En el contexto internacional, el país continúa registrando una tasa de recaudo baja como porcentaje del PIB –mientras en 2012 la tasa de recaudo del Gobierno central en países como Uruguay superaba un 19%, en Colombia era sólo de 13,3%. Uno de los factores que explica este bajo recaudo es la alta evasión. En Colombia, menos de 38% del total de sociedades presentaron su declaración de renta o de ingresos y patrimonio en 2013, lo que implica una base gravable bastante reducida.

Otra explicación del bajo recaudo es la gran cantidad de exenciones, deducciones y exclusiones, que reducen la base gravable de los distintos tributos. En el caso del impuesto de renta para personas naturales, tan sólo 4,9% de la población mayor a 25 años decla-

ró renta en 2012, situación que –según la DIAN– se espera mejorar a partir de la Ley 1607 de 2012. A pesar de que dicha Ley redujo el umbral a partir del cual se empieza a tributar, cabe resaltar que este continúa siendo alto frente a estándares internacionales.

Durante el período 2010-2014 se realizaron grandes cambios tributarios, siendo el más clave para la competitividad del país la reducción de los costos laborales no salariales, a través de la Ley 1607 de 2012. Sin embargo, dicha Ley introdujo modificaciones importantes en la estructura de algunos impuestos que generaron mayor complejidad y, en algunos casos, más inequidad, regresividad e ineficiencia al régimen tributario.

Si bien uno de los grandes objetivos de la Ley 1607 de 2012 fue darle una mayor equidad al sistema tributario, la inclusión de ciertas reglas generó un efecto contrario a lo que se esperaba. En particular, en el impuesto de renta para personas naturales, la introducción de diferentes formas de tributación dependiendo del tipo de persona –empleado, no empleado o trabajador por cuenta propia– lleva a que personas con la misma capacidad económica tributen de manera diferente.

El sistema tributario colombiano muestra también grandes falencias en materia de progresividad. Por ejemplo, las nuevas reglas del impuesto de renta para personas naturales, además de la complejidad que incorporaron, generaron mayor regresividad. Las tasas marginales del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) y del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) contienen errores técnicos que hacen que los ingresos más altos muchas veces resulten gravados con tasas menores que las aplicadas a ingresos más bajos³. Adicionalmente, si bien la Ley mantuvo el 25% de renta laboral exenta, modificó la forma de calcular

la renta laboral exenta en la medida en que ahora se determina después de aplicar las deducciones y exenciones, lo que genera una asimetría que favorece a los ingresos más altos y aumenta significativamente la tributación de las personas con ingresos medios y bajos⁴.

De otro lado, la estructura del sistema tributario colombiano se caracteriza por gravar en exceso algunas inversiones y actividades, lo que distorsiona la asignación de recursos en la economía, promueve la informalidad y vulnera el principio de eficiencia de la Constitución Política. Según el *Doing Business*, aunque Colombia ha reducido la tarifa total de los impuestos como porcentaje de las utilidades –mientras en 2010 era de 80,3%, en 2013 pasó a 76%–, en el contexto latinoamericano sigue siendo elevado y sólo se encuentra en una mejor posición que Bolivia y Argentina.

Aunque la Ley 1607 de 2012 corrigió parcialmente los elevados impuestos a la nómina, estos continúan siendo altos frente a estándares internacionales. Lo anterior, es un claro ejemplo del incumplimiento del principio de eficiencia por parte del sistema tributario colombiano. Igualmente, ante la reducción de los costos a la nómina el mecanismo de compensación utilizado en dicha Ley, introdujo elementos que también atentan contra la eficiencia del sistema. La exclusión de ciertas deducciones en el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) generó nuevas distorsiones que incrementan la tributación de muchas empresas por la vía de la doble tributación. Por ejemplo, no permite deducir los impuestos pagados en el exterior. Igualmente, el CREE no reconoce deducciones como excesos de renta presuntiva –3% del patrimonio líquido– o pérdidas fiscales⁵.

3. Aranguren, M. (2014). Algunas consideraciones sobre el nuevo régimen tributario de Colombia. Bogotá, D.C.: por publicar.

4. Ibid.

5. Ibid.



No.	Recomendación	Plazo	Avance 2014	Observaciones avance 2014	Lo mínimo a realizar en 2015	Principales responsables
1	Eliminar las diferencias de los regímenes que aplican a los distintos tipos de personas naturales, estableciendo tasas marginales mayores en la medida en que aumenta el nivel de renta de las personas.	Corto	x	x	Reforma tributaria.	Minhacienda y DIAN.
2	Reducir el umbral salarial a partir del cual se comienza a pagar impuesto de renta para personas naturales.	Corto	x	x	Reforma tributaria.	Minhacienda y DIAN.
3	Reducir la tasa efectiva de tributación de las sociedades: incrementar transitoriamente el impuesto de renta entre el 40% y 42% y eliminar el CREE.	Corto	x	x	Reforma tributaria.	Minhacienda y DIAN.
4	Ajustar el actual beneficio tributario para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación, de manera que responda a las necesidades del sector privado.	Corto	x	x	Realizar las modificaciones legales pertinentes.	Minhacienda, DIAN, Colciencias y DNP.
5	Incrementar el IVA al 19% y gravar todos los bienes y servicios a la tarifa general, manteniendo con tasa de 0% los bienes y servicios que efectivamente se exportan y los que por su función económica y social se consideran exentos.	Corto	x	x	Reforma tributaria.	Minhacienda y DIAN.
6	Eliminar el impuesto al consumo.	Corto	x	x	Reforma tributaria.	Minhacienda y DIAN.
7	Dar cumplimiento al último cronograma de desgravación del Gravamen a los Movimientos Financieros establecido en la Ley 1694 de 2013.	Corto		Se amplió el plazo de desgravación de este tributo mediante la Ley 1694 de 2013.	x	Minhacienda y DIAN.
8	Eliminar el impuesto al patrimonio para personas jurídicas.	Corto	x	x	x	Minhacienda y DIAN.
9	Continuar reduciendo los tributos atados a la nómina, incluyendo la eliminación del impuesto que financia a las cajas de compensación.	Corto	x	x	Reforma tributaria.	Minhacienda y DIAN.
10	Realizar una reforma tributaria que mejore la gestión tributaria e incremente el recaudo de los entes territoriales.	Mediano	x	x	Reforma tributaria regional.	Departamentos, municipios, DNP y Minhacienda.
11	Dotar de recursos suficientes —humanos, técnicos y financieros— a la DIAN, de forma tal que pueda fortalecer los controles para detectar y combatir la evasión y elusión tributaria. Así mismo, considerar la evasión y elusión tributaria como un delito penal.	Mediano	x	x	x	Minhacienda, DIAN, Fiscalía y Minjusticia.

SISTEMA TRIBUTARIO

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD





PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA

Una política de competencia estática y que deja de lado las dinámicas del mercado, eventualmente deja de ser efectiva. Por tanto, su fortalecimiento constante y su capacidad de adaptarse a las dinámicas de la economía son fundamentales para responder a los desafíos de los mercados.

Para incrementar la intensidad de la competencia en los mercados nacionales es indispensable analizar los avances en tres áreas fundamentales: i) institucionalidad y gestión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); ii) abogacía de la competencia; y iii) política de delación.

En cuanto a la gestión de la SIC, se destaca la actividad relacionada con las investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia (carteles, abusos de posición dominante, colusión y conductas unilaterales). Durante 2013 la Delegatura para la Protección de la Competencia recibió 517 quejas, inició 190 averiguaciones preliminares y abrió 10 investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia. A lo largo del año emitió 17 informes motivados al superintendente, e impuso sanciones en 8 casos de las investigaciones abiertas.

En el marco de estas investigaciones, durante 2013, la SIC impuso multas aproximadas por \$124.000 millones, que representan un aumento sustancial frente a 2012, año en que las multas impuestas no superaron \$20.000 millones.

El incremento del presupuesto de la Delegatura para la Protección de la Competencia pasó de \$12.194 millones en 2012 a \$21.142 millones en 2014, lo que representa un crecimiento del 32% promedio anual. El fortalecimiento presupuestal de la Delegatura permite contar con mejores herramientas técnicas para las investigaciones tanto en recursos físicos como en recursos humanos.

Otro de los avances en materia de institucionalidad son los esfuerzos de la SIC por tener mayor presencia en las regiones, mediante la implementación de varios programas para dar a conocer sus servicios en todo el país. A través del programa SIC Móvil, el Superintendente y sus delegados se han desplazado a 12 ciudades desde febrero de 2013 y han realizado talleres y reuniones con empresarios. En 2013, la SIC también lanzó el programa SIC Te Ve, que se transmite semanalmente en el Señal Institucional y que a la fecha ha emitido cerca de 50 capítulos.

A pesar de estos avances en la gestión de la SIC, es necesario que esta entidad sea totalmente independiente de la Rama Ejecutiva. En particular, se considera inconveniente que el Superintendente sea un cargo de libre nombramiento y remoción. Sin duda, esta es una reforma institucional profunda que es necesaria para garantizar un adecuado funcionamiento de la SIC.

Con respecto a la abogacía de la competencia-práctica importante para evitar la que las políticas públicas, regulaciones y actuaciones institucionales sean contrarias a la libre competencia-se considera que se deben tomar medidas adicionales para que esta política esté completamente alineada con las recomendaciones de la ICN y tenga un impacto relevante dentro del proceso regulatorio colombiano.

A pesar de que la SIC ha expedido conceptos para todas las consultas sobre regulación que le han sido remitidas

durante lo que va corrido de 2014, lo cierto es que la aplicación de esta política es limitada debido a la falta de canales de información fluidos para que la SIC conozca proyectos de regulación potencialmente dañinos para la competencia. Adicionalmente, esta práctica todavía no se ha institucionalizado para la revisión de la regulación vigente, lo cual es una tarea pendiente si se quiere fortalecer la regulación del país.

En cuanto a la política de delación, la puesta en marcha de dicha política es fundamental para investigar y castigar prácticas anticompetitivas altamente dañinas como carteles.

En este contexto, el capítulo provee recomendaciones para mejorar la institucionalidad y la gestión de la SIC; para incrementar el impacto de la abogacía de la competencia; y para fortalecer la política de delación. Estas recomendaciones se resumen el siguiente cuadro.



Cuadro. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Promoción y Protección de la Competencia.



No.	Recomendación	Plazo	Avance 2014	Observaciones avance 2014	Lo mínimo a realizar en 2015	Principales responsables
1	Nombramiento y remoción del Superintendente de Industria y Comercio; período de duración en el cargo.	Corto		No se registraron avances.	Presentar proyecto de Ley ante el Congreso.	SIC.
2	Separación entre la fase de investigación y la fase de decisión en casos de prácticas restrictivas de la competencia.	Corto	x	x	Presentar proyecto de Ley ante el Congreso.	SIC.
3	Toma de decisiones por parte del Superintendente (Cuerpo colegiado o fortaleza del Consejo Asesor).	Corto	x	x	Presentar proyecto de Ley ante el Congreso.	SIC.
4	Expedición de guías de integraciones y delación.	Corto		x	Expedir guías.	SIC.
5	Aumentar el número de proyectos de regulación que estudia anualmente la SIC por abogacía de la competencia.	Mediano		Durante 2013 y 2014 la SIC ha aumentado el número de conceptos estudiados y emitidos.	Reforzar interacción con agencias, ministerios y comisiones de regulación.	SIC.
6	Abogacía de la competencia - Estrechar relaciones con otras instituciones que vigilan las normas por expedir.	Mediano		En 2014 se han iniciado acercamientos con el DNP y con el Comité de Seguimiento del Mercado de Energía Mayorista.	Suscribir convenios de colaboración con las entidades.	SIC.
7	Analizar la eficacia del marco normativo vigente aplicable a delación.	Mediano	x	x	Hacer análisis de la efectividad de la política y presentar propuestas de cambio normativo (modificación al Decreto 2896 de 2010).	SIC.
8	Delación - otorgar mayores beneficios penales, tales como la rebaja total de la pena o la revisión de la inhabilidad que actualmente se declararía, para que la política de delación sea aplicable en colusiones en licitaciones públicas.	Corto		No se registraron avances.	Presentar proyecto de Ley ante el Congreso.	SIC, Mininterior y Minjusticia.

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.



Avance satisfactorio



Avance con retrasos



Sin avances o retrasos significativos



No aplica



JUSTICIA

Existe consenso sobre la necesidad de mejorar el sistema judicial colombiano como una condición necesaria para contar con un país más competitivo. Sin embargo, la eficiencia y la efectividad de dicho sistema han tenido muy pocos avances durante los últimos años, situación que se ve reflejada en las calificaciones y percepciones sobre el aparato judicial colombiano en diversos indicadores internacionales.

Por ejemplo, en el indicador “Eficiencia del marco legal para resolver disputas”, contenido en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), Colombia ha mantenido una calificación promedio de 3,35 sobre 7 entre los años 2010 y 2014, cifra que refleja los rezagos que tiene el país en esta materia. El costo de oportunidad de este estancamiento es muy alto, en especial si se tiene en cuenta que otros países latinoamericanos vienen avanzando a un ritmo acelerado, dejando a Colombia rezagada en el contexto regional.

La Rama Judicial colombiana tiene dos grandes cuellos de botella que impiden que el sistema sea realmente competitivo. En primer lugar, el sistema requiere que se cumplan ciertos criterios de calidad, entre los que se incluyen la independencia, la autonomía y la protección del derecho. En este sentido, vale la pena destacar que Colombia es el tercer país de Latinoamérica que más ha empeorado en el Índice

de Independencia Judicial del WEF, al pasar de una calificación de 3,5 sobre 7 en 2010, a una calificación de 2,8 sobre 7 en 2014. Estos resultados son síntoma de un aparato judicial que se percibe como poco independiente, donde las decisiones judiciales se pueden ver influenciadas por intereses particulares o políticos, afectando la calidad de la justicia.

Por otro lado, a pesar de que la calidad de la justicia empieza por contar con una Rama Judicial con un capital humano altamente formado, con elevados estándares de profesionalización, sofisticación conceptual y pensamiento crítico, lo cierto es que los niveles educativos de la rama judicial son relativamente bajos, lo cual se hace evidente al observar que menos de 3% de sus funcionarios cuenta con estudios de maestría o doctorado. Si bien los bajos niveles educativos de la rama judicial pueden corresponder a los bajos requisitos exigidos a los funcionarios públicos en dicha rama, sería conveniente incrementar el nivel de exigencia de tales requisitos para contar con funcionarios mejor calificados.

El segundo cuello de botella que presenta la Rama Judicial colombiana es su baja productividad. En este aspecto, vale la pena destacar que la evacuación de procesos judiciales ha mejorado desde la ejecución del primer Plan Nacional de Descongestión en 2009. Sin embargo, los múltiples esfuerzos, iniciativas e inversiones por la descongestión judicial no son suficientes, por cuanto se basan en la creación de jueces de descongestión y otros mecanismos temporales que no resuelven de manera permanente y estructural el problema de productividad de la justicia y que, más allá de haber superado parcialmente el efecto de la congestión, se han convertido en mecanismos improvisados para solucionar una situación coyuntural.

Más aún, es posible observar que las jurisdicciones ordinaria y administrativa

están lejos de poder atender el nivel de demanda por sus servicios, pues para 2012 únicamente resolvieron 55,4% y 67,1% de la demanda total de justicia de su jurisdicción. Por lo tanto, se estima que si la rama judicial quiere evacuar la totalidad del inventario acumulado para el 2018, debe aumentar el índice de evacuación parcial IEP a 117% los próximos cuatro años, lo que implica que por cada 100 procesos que ingresen a la rama judicial, se deberían evacuar 117.

Además, a pesar de que la productividad de la Rama Judicial podría mejorarse de manera significativa con la implementación de TIC en este sistema, por ejemplo a través de la creación del expediente judicial digital, preocupa el hecho de que el Plan Estratégico Tecnológico de la rama judicial, muestra grandes retrasos en su implementación, a pesar de que se encuentra aprobado desde el año 2012.

Bajo este contexto, este capítulo propone una serie de recomendaciones para hacer frente a las oportunidades de mejora que tiene el sector Justicia tanto en su calidad como en su productividad, pilares sobre los cuales se puede empezar a construir una rama judicial altamente competitiva.

El cuadro a continuación presenta las principales recomendaciones al sector Justicia.



Cuadro. Principales recomendaciones en materia de Justicia.



JUSTICIA

No.	Recomendación	Plazo	Avance 2014	Observaciones avance 2014	Lo mínimo a realizar en 2015	Principales responsables
1	Elevar los estándares para el ejercicio de la profesión judicial en todo el país.	Corto		x	Realizar un estudio de mejoramiento salarial en la rama judicial. Modificar el concurso de méritos de los jueces, otorgando más peso a la experiencia. Diseñar una prueba de carácter y aptitud de los jueces. Constituir un grupo de trabajo encargado del diseño y la implementación de tales mecanismos.	Minhacienda, Mintrabajo y SIGEP.
2	Impulsar el uso de precedentes judiciales vinculante y para racionalizar el uso de la tutela.	Largo		En agosto de 2014, el MinJusticia preparó una reforma a la justicia donde se incluye este tema. Sin embargo, dicha reforma no se ha presentado.	Asignar jueces especializados para la resolución de las tutelas remanentes.	Minjusticia.
3	Diseñar una política pública de especialización Judicial.	Corto		Creación del piloto para agilizar la jurisdicción Civil Municipal de Bogotá.	Realizar un estudio de mejores prácticas internacionales en especialización judicial. Realizar un piloto para probar la utilidad de tener juzgados ejecutivos especializados. Realizar un piloto para la creación oficinas de servicios administrativos judiciales.	Consejo Superior de la Judicatura.
4	Crear un sistema de administración judicial eficiente y transparente.	Mediano		En septiembre de 2014, el Gobierno Nacional presentó al congreso una reforma de equilibrio de poderes, donde se incluye la creación de un Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial.	Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Crear mecanismos de medición presupuestal y administrativa de la rama judicial.	Minjusticia.
5	Acelerar la implementación de códigos procesales.	Corto		x	Desarrollar indicadores para monitorear la implementación de los códigos. Incorporar profesionales especializados en la gestión de proyectos dentro de las comisiones de seguimiento.	Consejo Superior de la Judicatura.
6	Nombrar al CIO de la rama judicial.	Corto		x	Elegir y asignar al CIO.	Consejo Superior de la Judicatura.
7	Implementación de TIC en la justicia.	Mediano		La Superintendencia de Sociedades ha avanzado en la puesta en práctica de un Piloto de expediente judicial digital para los procesos que manejan.	Desarrollar los planes operativos, financieros y de arquitectura de los sistemas de tecnológicos de la rama judicial. Implementar el expediente judicial digital. Implementar el Plan Estratégico Tecnológico (PET) en una primera fase.	Consejo Superior de la Judicatura.

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.



Avance satisfactorio



Avance con retrasos



Sin avances o retrasos significativos



No aplica



CORRUPCIÓN

La corrupción es una de las razones más importantes para explicar los rezagos de un país en materia de competitividad, pues desestimula la inversión, aumenta la desconfianza y resulta en una asignación ineficiente de recursos hacia áreas diferentes a aquellas que son clave para la productividad. No es coincidencia, por tanto, que los países con mayores niveles de competitividad sean, a su vez, los que registran menores niveles de percepción de corrupción.

En Colombia se ha avanzado de manera importante en el diseño de un marco normativo e institucional que brinde las herramientas necesarias para la lucha contra la corrupción. En particular, se destaca la expedición en 2013 del CONPES 167, documento que contiene la estrategia para un Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA).

Sin embargo, los resultados de estas iniciativas aún están por verse. Más aún, es tal la magnitud del problema que representa la corrupción en la competitividad del país, que de acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) el factor más problemático para hacer negocios en Colombia es la corrupción, resultado que se ha mantenido en los últimos cinco años.

La corrupción es un fenómeno que afecta de manera particular al sector público, tal como lo refleja el último índice de percepción de la corrupción (IPC) calculado por la organización Transparencia

Internacional. De acuerdo con este indicador, Colombia se ubica en el puesto 94 sobre 177 países evaluados. Esta situación resulta desalentadora, en especial si se tiene en cuenta que Colombia ha descendido 16 puestos con respecto al mismo indicador en el año 2010, mientras que otros países de Latinoamérica se han mantenido relativamente estables.

Los indicadores domésticos en materia de corrupción señalan el mismo panorama. En particular, uno de los retos más importantes por parte del sector público corresponde a la implementación de la normativa estratégica anticorrupción. En este aspecto, las entidades públicas del orden nacional aún tienen un camino importante por recorrer, y se encuentran lejos de constituirse en entidades realmente transparentes.

Por su parte, para las entidades territoriales, se puede observar que en algunos departamentos aún persisten gobiernos locales muy débiles, con dificultades importantes en cumplir la normativa fundamental para evitar y prevenir la corrupción. Esto debe llamar la atención, pues sin gobiernos locales abiertos resulta muy difícil impulsar y promover acciones que fomenten la competitividad desde el nivel local. Así mismo, el cumplimiento de la normativa anticorrupción en temas fundamentales para la competitividad del país como Justicia, Salud y Educación, es deficiente, pues dicho cumplimiento ni siquiera llega al 10% en estos casos.

El fenómeno de la corrupción en Colombia no es exclusivo del sector público, sino que también involucra al sector privado, el cual muchas veces es cómplice – si no artífice – de prácticas corruptas que se presentan en el país. De acuerdo con la encuesta de fraude en Colombia realizada por KPMG en 2013, la corrupción supuso un costo económico cercano a US\$ 800 millones para las compañías, y 31% de los

crímenes económicos estuvo relacionado con esta práctica.

Por su parte, de acuerdo con la tercera encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno de Transparencia por Colombia y la Universidad Externado, cerca de 94% de los empresarios encuestados cree que se ofrecen sobornos en el entorno de negocios, mientras que 62% considera que si no se pagan sobornos, se pierden negocios. Más allá de reconocer la presencia de la corrupción en el sector público, lo cierto es que la práctica frecuente de pagos de sobornos encuentra un caldo de cultivo en el exceso de trámites y procedimientos engorrosos exigidos por el sector público, situación que incentiva a los empresarios a recurrir a pagos ilegales para acelerar procesos o evitar ciertos trámites. Lo anterior es un síntoma de que, a pesar de que existen ciertos avances en este tema, el país cuenta con normativas y regulaciones ineficientes y que deberían ser revisadas.

De acuerdo con lo anterior, este capítulo propone una serie de acciones encaminadas a reducir la corrupción tanto del sector público como del sector privado, e invita a aprovechar y priorizar los avances que se vienen dando en la materia, desde el Gobierno nacional, para la lucha contra la corrupción.

A continuación se presentan las recomendaciones del Consejo Privado de Competitividad en materia de Corrupción.



Cuadro. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Corrupción.



CORUPCIÓN

No.	Recomendación	Plazo	Avance 2014	Observaciones avance 2014	Lo mínimo a realizar en 2015	Principales responsables
1	Avanzar en la implementación de la Política Pública Integral Anticorrupción.	Corto		Se publicó el CONPES 167 que contiene la estrategia de la PPIA.	Tener un avance satisfactorio en las acciones de corto plazo de la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA).	Secretaría de Transparencia.
2	Implementar programas de prevención y mejores prácticas anticorrupción en las entidades territoriales.	Mediano		Se aprobó la Ley 1712 de 2014 de acceso a la información pública.	Desarrollar un piloto del programa de prevención de la corrupción a nivel territorial. Crear el portal de transparencia económica.	Secretaría de Transparencia y MinTIC.
3	Implementar programas de prevención y mejores prácticas anticorrupción en temáticas estratégicas.	Mediano		Se aprobó la Ley 1712 de 2014 de acceso a la información pública.	Contar con una medición nueva del IGA a nivel sectorial. Crear un programa de detección de riesgos anticorrupción en diferentes sectores.	Secretaría de Transparencia y Ministerios.
4	Fortalecer el observatorio anticorrupción e implementar estrategias de minería de datos y análisis predictivo.	Corto		El observatorio anticorrupción volvió a estar en funcionamiento.	Crear una batería de indicadores completos y accesibles al público. Desarrollar las estrategias y contratar los sistemas que tengan la capacidad de hacer estos análisis.	Secretaría de Transparencia y MinTIC.
5	Crear un grupo multidisciplinario con el fin de identificar las fuentes de corrupción.	Corto		x	Crear el grupo.	Secretaría de Transparencia.
6	Fortalecer las herramientas de denuncia que reduzcan la impunidad.	Corto		Se creó la aplicación "Elefantes Blancos".	Crear la ventanilla única de denuncias de corrupción.	Secretaría de Transparencia y MinTIC.
7	Acoger las recomendaciones de la OCDE en materia de corrupción.	Mediano		Se está trabajando en el proyecto de ley de responsabilidad de personas jurídicas en sobornos transnacionales.	Hacer obligatorio la utilización de los Acuerdos Marco de Precio para las entidades territoriales y las ramas Legislativa y Judicial. Tener en funcionamiento el SECOP II.	Secretaría de Transparencia.
8	Adoptar programas de prevención y cumplimiento de mejores prácticas anticorrupción.	Corto		Se avanza en la creación del Plan de Trabajo para hacer parte de EITI.	Haber presentado la propuesta a EITI.	Sector privado y Minminas y otros Ministerios.

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

Avance satisfactorio

Avance con retrasos

Sin avances o retrasos significativos

No aplica



ENERGÍA

El sector eléctrico colombiano cumple con su rol de proveer un servicio público a la inmensa mayoría de la población colombiana de manera confiable. No obstante, para el Consejo Privado de Competitividad es necesario fortalecer el desempeño de este sector para que, adicional a la confiabilidad en el suministro eléctrico, pueda apalancar decididamente la aparición y desarrollo de actividades productivas intensivas en energía.

Lo anterior es fundamental, debido a que el desarrollo de actividades industriales con alta intensidad energética juega un rol crucial en el crecimiento económico y en la generación de empleo de los países. De acuerdo con McKinsey Global Institute⁶, las actividades manufactureras que tienen una intensidad energética alta o media-alta, representan el 53% del valor agregado manufacturero y el 43% del empleo manufacturero en los países en desarrollo.

El bajo consumo de energía eléctrica del país ilustra que el desarrollo de actividades industriales intensivas en este recurso es incipiente. Según la Agencia Internacional de Energía, el consumo per cápita de energía eléctrica del país en 2012 fue 1.130 kWh, cifra que es solo superior a la alcanzada por cinco países latinoamericanos (El Salvador, Hon-

duras, Bolivia, Nicaragua y Guatemala), de una muestra de 19 países. El rezago del país en materia de consumo energético per cápita es significativo, pues el consumo promedio de Latinoamérica es 52% superior mientras que los de Chile, Brasil y México son 3,4, 2,2 y 1,9 veces más grandes. Es preocupante que el crecimiento reciente del consumo de energía per cápita (2,6% promedio anual entre 2009 y 2012) es insuficiente para cerrar estas brechas en el mediano plazo, ya que fue inferior al promedio de la región (3,1%) y estuvo muy por debajo del de Chile (5,0%) y del de Brasil (4,5%).

Si bien el bajo desarrollo de actividades productivas intensivas en energía eléctrica en el país puede ser consecuencia de múltiples factores, tales como condiciones de infraestructura y logística adversas, carencia de capital humano pertinente, baja disponibilidad de financiamiento a precios competitivos, entre otros, es probable que el precio de la energía eléctrica sea un factor relevante que explique el bajo consumo de energía del país.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la energía eléctrica ha crecido a una tasa promedio anual de 6,4% entre 2003 y 2013, mientras que el IPC total ha hecho lo propio en 4,3%. De esta manera, la tasa de crecimiento del IPC de la energía eléctrica ha sido 46% superior a la tasa de crecimiento de la inflación del país. Al hacer comparaciones internacionales del precio de la energía eléctrica para la industria, se concluye que a pesar de que el precio en Colombia no es de los más altos dentro de una muestra representativa de países, es posible realizar esfuerzos adicionales para que este costo sea más competitivo, sin afectar la

sostenibilidad de la oferta eléctrica ni sus incentivos a la inversión.

En este contexto, el capítulo detalla los principales avances del país durante el último año en factores que inciden en la formación del precio de la energía eléctrica, tales como: i) condiciones generales del país; ii) eficiencia de la industria energética; iii) política y regulación energética; y iv) uso eficiente de la energía.

De la misma manera, el capítulo contiene recomendaciones en estas cuatro áreas que se presentan en el cuadro a continuación. Dentro de estas recomendaciones se destaca: i) la necesidad de contar con una política robusta de promoción de la oferta flexible de gas, insu- mo clave para las plantas térmicas y, por ende, del adecuado funcionamiento del mercado eléctrico; ii) el fortalecimiento del Plan de Expansión de Transmisión 2013-2027 para reducir las restricciones del sistema; iii) la optimización del cargo por confiabilidad para no generar sobrecostos innecesarios a los usuarios; iv) robustecer el esquema regulatorio de transmisión y distribución para que refleje, de mejor manera, costos eficientes de producción; y v) reglamentación de la Ley 1715 de 2014 con respecto a las acciones para incrementar la eficiencia energética del país.

6. McKinsey Global Institute (2012). *Manufacturing the future: the next era of global growth and innovation*.



No.	Recomendación	Plazo	Avance 2014	Observaciones avance 2014	Lo mínimo a realizar en 2015	Principales responsables
1	Coordinación institucional.	Corto		Se comenzó la implementación del Conpes 3762 de 2013. Se fortalecieron las funciones de la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos (CIPE). En la actualidad, 10 proyectos de energía son clasificados como PINES.	Política integral de desarrollo de proyectos de infraestructura energética que involucre normatividad sobre aspectos ambientales, sociales y de adquisición de predios, entre otros temas.	Entidades pertenecientes a la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos (CIPE).
2	Estudio para mejorar el funcionamiento del mercado de gas natural.	Corto		No se evidenciaron avances.	Estudio finalizado con diagnóstico y recomendaciones que permitan mejorar diferentes aspectos del mercado.	Minminas, MinCIT y sector privado interesado.
3	Promoción de la oferta flexible de gas.	Largo		Se expidió resolución que limita las exportaciones de gas.	Documento diagnóstico, objetivos y líneas de acción en materia de política pública que incrementen la oferta flexible de gas en el país.	Minminas y UPME.
4	Actualización del cargo por distribución de gas.	Corto		No se evidenciaron avances.	Actualización de la demanda proyectada para calcular el cargo y aumento del techo tarifario aplicable a usuarios de bajo consumo.	Minminas y CREG.
5	Fortalecer el Plan de Expansión de Transmisión de Energía Eléctrica 2013-2027.	Corto	x	x	Concepto aprobatorio para la totalidad de los proyectos recomendados por XM para reducir las restricciones.	Minminas y UPME.
6	Fortalecimiento del Comité de Seguimiento del Mercado de Energía Mayorista (CSMEM) y adscribirlo a la SIC.	Corto		Dado que no es viable adscribir el CSMEM a la SIC, se ha mejorado la coordinación entre esta entidad y la Superintendencia de Servicios Públicos. Los reportes del CSMEM se modificaron para incluir información relevante para que la SIC pueda fortalecer control y vigilancia.	x	Minminas, Superintendencia de Servicios Públicos y SIC.
7	Mercado Organizado de Contratos (MOR).	Corto	x	x	Adopción de recomendaciones de CSMEM (2014): i) obligación a generadores para que oferten un porcentaje de su ENFICC en el MOR; y ii) extensión del horizonte de las subastas a por lo menos cinco años.	CREG.
8	Optimización del Cargo por Confiabilidad.	Mediano		No se evidenciaron avances.	Actualización de la demanda objetivo para afinar cargo por confiabilidad de subastas futuras. Documento técnico con bases para lograr que subastas sólo remuneren a las plantas que ganan cada subasta y no a todo el parque de generación. Ver Consejo Privado de Competitividad (2013) para mayor información.	Minminas, UPME y CREG.
9	Regulación actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica.	Corto	x	En la actualidad, la CREG se encuentra en proceso de expedir las resoluciones pertinentes.	Resoluciones expedidas y que contengan disposiciones que reflejen costos eficientes. Se espera un mejoramiento en la metodología de valoración de los activos para que sea más consistente y para que se asegure que el resultado de la metodología se aplique efectivamente de manera gradual, si es necesario. Ver Consejo Privado de Competitividad (2013) para mayor información.	CREG.
10	Reglamentación de la Ley 1715 de 2014 en lo referente a uso eficiente de energía.	Corto	x	x	Decretos reglamentarios expedidos que incluyan el plan de acción indicativo del PROURE. Resoluciones CREG expedidas en lo relacionado con la respuesta a la demanda.	Minminas y CREG.

ENERGÍA

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD



Avance satisfactorio



Sin avances o retrasos significativos



Acción terminada



No aplica



EFICIENCIA DEL ESTADO PARA LA COMPETITIVIDAD

Desde la creación del Sistema Nacional de Competitividad, Colombia ha diseñado múltiples agendas para promover la competitividad del país. Sin embargo, de poco sirve tener agendas contundentes para abordar los cuellos de botella que limitan la competitividad, si existen problemas en la eficiencia del Gobierno que dificultan su implementación. En este sentido, la falta de mayor eficiencia del Estado podría estar convirtiéndose en una restricción vinculante (“binding constraint”) que habría que abordar si se quiere empezar a lograr resultados tangibles en materia de competitividad.

Lo anterior no debería sorprender, en la medida en que, el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) se encuentra estrechamente relacionado con el indicador de eficiencia del Estado del Banco Mundial. En particular, los resultados de Colombia en este último indicador no son los mejores, siendo superado por varios países de América Latina, lo cual da una señal importante respecto al espacio de mejora que tiene Colombia en términos de la eficiencia de su Estado.

Aunque el debate sobre la eficiencia del Estado para la competitividad posee un sinnúmero de aristas, el capítulo aborda este tema desde tres elementos específicos, asociados al impacto sobre la implementación de la agenda de competitividad del país: i) la coordinación para la

ejecución de políticas asociadas al tema de competitividad, ii) el capital humano del sector público y iii) la interacción entre el empresariado y el sector público.

En primer lugar, se destaca que a pesar de que el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCel) está siendo mostrado como ejemplo de coordinación para muchos países, realmente no se le está sacando todo el provecho y está lejos de funcionar como la arquitectura institucional idónea para la coordinación de los múltiples actores y esfuerzos que implica la agenda de competitividad del país.

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación, máxima instancia del SNCel, no se ha utilizado para lograr que se alineen todos los actores bajo una misma partitura respecto a la visión de largo plazo de la competitividad del país. Asimismo, el Comité Ejecutivo del SNCel no ha logrado llevar a cabo de forma efectiva su función de coordinación y dirección del Sistema —entre otras razones— por no contar con el empoderamiento presidencial frente al resto de Ministerios y agencias públicas para exigir el cumplimiento de compromisos bajo la agenda de competitividad. Por su parte, la mayoría de las Comisiones Regionales de Competitividad, brazos a nivel departamental del SNCel, siguen siendo muy débiles institucionalmente y no se han convertido en el espacio de articulación de los diferentes actores a nivel local para definir e implementar las agendas de competitividad de los departamentos. Estos problemas en los arreglos institucionales para la coordinación han llevado a que muchas acciones dentro de la agenda de competitividad, se hayan visto afectadas en su implementación.

En segundo lugar, parte de los problemas de eficiencia del Estado se deben al débil capital humano con el que cuenta el sector público colombiano. En particular, resulta preocupante la baja prepara-

ción del servicio civil colombiano, lo que se pone de presente al observar que menos del 5% de los funcionarios públicos cuenta con estudios completos de maestría o doctorado.

Además, no existen los suficientes incentivos para atraer a capital humano capacitado. Por ejemplo, el salario promedio anual de un funcionario público de nivel directivo en Colombia es menos de la mitad del salario promedio anual que reciben los directivos en el sector público en Estados Unidos.

En tercer lugar, una interacción eficiente entre el empresariado y el sector público, a través de la simplificación y la aceleración de trámites frente al Estado, es vital para reducir los costos de transacción del sector productivo nacional. A pesar de los grandes esfuerzos realizados por el Estado colombiano para mejorar la agilidad y la simplicidad con la que el sector público presta sus servicios, la “Burocracia Gubernamental Ineficiente” es percibida —de acuerdo con el WEF— como el tercer factor más problemático para hacer negocios en el país. Detrás de estas percepciones está el hecho de que, apesar de los avances recientes en materia de mejora normativa, el país aún no cuenta con una política de gobierno que soporte la calidad regulatoria en Colombia.

En este capítulo se presentan recomendaciones —resumidas en el cuadro a continuación— para lograr una mayor eficiencia en el Estado en los tres elementos mencionados anteriormente, en el entendido de que dichos elementos son un buen comienzo para abrir la discusión y para abordar temas fundamentales que podrían llegar a tener efectos importantes en el avance de Colombia en los indicadores internacionales de competitividad.



No.	Recomendación	Plazo	Avance 2014	Lo mínimo a realizar en 2015	Principales responsables
1	Robustecer los mecanismos de liderazgo y trabajo intersectorial del SNCel.	Corto	x	Convocar la reunión de la CNCel cada semestre. Llevar al consejo de ministros el seguimiento a la Agenda de Competitividad. Utilizar la CNCel como espacio para alinear a todos los actores en pro de la competitividad. Transferir la interlocución con las CRC a Presidencia y establecer los mecanismos y procedimientos de comunicación. Implementar un esquema de contrapartidas a nivel nacional si los proyectos de inversión han sido presentados por las CRC.	Presidencia de la República.
2	Diseñar e implementar un programa por la acción regional.	Largo	x	Crear un sistema de estadísticas territoriales completas y comparables (1), que incluya información como concentración empresarial, disponibilidad de recursos naturales, accesibilidad a núcleos urbanos, competencias de la población, entre muchas otras (2). Garantizar la presencia de representantes del sector privado en las CRC.	DNP.
3	Aprovechar los Comités Técnicos Mixtos (CTM) para coordinar la implementación de acciones de la agenda de competitividad.	Corto	x	Consensuar la meta, las prioridades y las responsabilidades de cada agenda.	Presidencia de la República y entidad líder correspondiente.
4	Crear programa de reclutamiento para servidores públicos de cargos medios-altos.	Mediano	x	Estudiar las buenas prácticas de Inglaterra, Canadá y Singapur. Diseñar una primera estructura del programa.	DAFP y Presidencia de la República.
5	Diseñar un sistema de evaluación y promoción.	Largo	x	Agrupar las entidades públicas en subgrupos de acuerdo con su función. Diseñar criterios y métodos de evaluación, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la propuesta. Identificar y aplicar instrumentos de medición de la productividad laboral. Trasladar a los trabajadores la responsabilidad de capacitación. Robustecer el SIGEP a través de la inclusión de indicadores completos.	DAFP y Presidencia de la República.
6	Diseñar y difundir un test de razonabilidad aplicable a las decisiones relativas a sanciones disciplinarias o penales de servidores públicos.	Corto	x	Constituir el Grupo de Trabajo. Diseñar la prueba correspondiente. Avanzar en el establecimiento de los estándares que serán incluidos en la prueba.	Rama Judicial, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Academia.
7	Crear grupo de trabajo para evaluar la posibilidad de excluir ciertas faltas menores de sanciones disciplinarias, y capturarlas a través de la evaluación de desempeño.	Mediano	x	Identificar el grupo de fallas menores. Estudiar la posibilidad de modificar el Código Disciplinario Único. Avanzar en el mecanismo de evaluación de desempeño.	Presidencia de la República, un representante de la rama legislativa, un representante de la rama judicial y los órganos de control.
8	Diseñar e implementar un sistema de prevención integral y vinculante.	Largo	x	Crear un grupo de trabajo con todos los órganos de control del país. Identificar elementos del SIP que puedan ser utilizados.	Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República.
9	Crear y poner en funcionamiento la oficina de asuntos regulatorios.	Mediano	x	Crear la oficina de asuntos regulatorios. Avanzar en el diseño de un análisis de impacto normativo (AIN). Establecer el mecanismo de funcionamiento del programa de desregulación nacional.	Presidencia de la República y DNP.

Notas: 1. Para estos efectos se podría utilizar como punto de partida el Índice Departamental de Competitividad elaborado por el CPC y la Universidad del Rosario, construyendo y adicionando variables aún faltantes y fundamentales para la competitividad; 2. Dicha información debe ser de fácil acceso para garantizar el diálogo y el empoderamiento de esta información por parte de la academia, el sector privado y la ciudadanía en general, lo que permite ejercer control a la gestión pública y detectar alertas tempranas. **Fuente:** Análisis Consejo Privado de Competitividad.

Avance satisfactorio

Sin avances o retrasos significativos

Avance con retrasos

x No aplica



AGRADECIMIENTOS

Las siguientes personas colaboraron con el Consejo Privado de Competitividad, bien sea en discusiones académicas o profesionales relacionadas con los temas abordados en el Informe Nacional de Competitividad 2014-2015, o en calidad de pares revisores de los diferentes capítulos incluidos en el informe.

La colaboración de las personas a continuación no implica de ninguna forma su aceptación o adhesión a los análisis y recomendaciones incluidos en el Informe, o la de las organizaciones a las que pertenecen.

- | | | |
|--|---|---|
| ■ Ángela Montoya , <i>Acolgen</i> | ■ Marie Christine Terner , <i>Banco Interamericano de Desarrollo</i> | ■ Liliana Caballero , <i>Departamento Administrativo de la Función Pública</i> |
| ■ Bayron Triana , <i>Acolgen</i> | ■ Rubén Darío Cadavid , <i>Cámara de Comercio de Medellín</i> | ■ María José Martínez , <i>Departamento Administrativo de la Función Pública</i> |
| ■ Daniel Mitchell , <i>Acoplásticos</i> | ■ Víctor Muñoz , <i>Carvajal</i> | ■ Lina María Castaño , <i>Departamento Nacional de Planeación</i> |
| ■ Nicolás Penagos , <i>Agencia Nacional de Contratación Pública "Colombia Compra Eficiente"</i> | ■ Rafael Pérez , <i>Celsia</i> | ■ Rodrigo Moreira , <i>Departamento Nacional de Planeación</i> |
| ■ Alejandro Castañeda , <i>Andeg</i> | ■ Isabella Muñoz , <i>Colcapital</i> | ■ César Merchán , <i>Departamento Nacional de Planeación</i> |
| ■ Andrés Pesca , <i>Andeg</i> | ■ Andrés León , <i>Colciencias</i> | ■ Santiago Ángel , <i>Departamento Nacional de Planeación</i> |
| ■ Edwin Maldonado , <i>ANDI</i> | ■ Pedro Alfonso Blanco , <i>Compañía de Galletas Noel S.A.S.</i> | ■ Rafael Puyana , <i>Departamento Nacional de Planeación</i> |
| ■ Édgar Higuera , <i>ANDI</i> | ■ Diana Gaviria , <i>Connect Bogotá</i> | ■ Nasly Frías , <i>Departamento Nacional de Planeación</i> |
| ■ Sergio Clavijo , <i>ANIF</i> | ■ Francisco Manrique , <i>Connect Bogotá</i> | ■ Juan Carlos Mojica , <i>Departamento Nacional de Planeación</i> |
| ■ Alejandro Vera , <i>ANIF</i> | ■ Marcela Rueda , <i>Connect Bogotá</i> | ■ Johnny Alexander López , <i>Departamento Nacional de Planeación</i> |
| ■ David Malagón , <i>ANIF</i> | ■ Hernando José Gómez , <i>Consultor independiente</i> | |
| ■ Jonathan Malagón , <i>Asobancaria</i> | ■ Camilo Montes , <i>Consultor independiente</i> | |
| ■ Liz Marcela Bejarano , <i>Asobancaria</i> | ■ Mauricio Yepes , <i>Corona</i> | |
| ■ José Camilo Manzur , <i>Asocodis</i> | ■ Carolina Santamaría , <i>Corona</i> | |
| ■ Sebastián Ramírez , <i>Asofondos</i> | ■ Mauricio Rodríguez , <i>Cosenit</i> | |
| ■ Santiago Montenegro , <i>Asofondos</i> | | |
| ■ Gloria Alonso , <i>Banco de la República</i> | | |
| ■ Esteban Gómez , <i>Banco de la República</i> | | |



- **Sara Patricia Rivera**, Departamento Nacional de Planeación
- **Ricardo Duarte**, DG&A Abogados
- **Natasha Avendaño**, DIAN
- **María Fernanda Tenjo**, Columbia University
- **Mario Aranguren**, ex Director de la DIAN
- **Augusto Ibáñez**, ex Magistrado, Corte Suprema de Justicia
- **Guillermo Eduardo Perry**, ex Ministro de Hacienda y Crédito Público
- **Alberto Carrasquilla**, ex Ministro de Hacienda y Crédito Público
- **Roberto Esguerra**, ex Director Fundación Santa Fe de Bogotá
- **Jorge Humberto Botero**, Fasescolda
- **Christian Mora**, Fasescolda
- **Dairo Estrada**, Finagro
- **Paula Zuleta**, Finagro
- **Iván Darío González**, Fundación Santa Fe de Bogotá
- **Juan Pablo Uribe**, Fundación Santa Fe de Bogotá
- **Juan Manuel Alvarado**, Fundesarrollo
- **Lilian Urueta**, Fundesarrollo
- **Carmen Aidee Aspiazú**, Grupo Argos
- **David Bojanini**, Grupo Sura
- **Sergio Sarmiento**, Innpulsa
- **Carlos Rebellón**, Intel
- **Ángela Jeaneth Ospina**, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
- **Óscar González**, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
- **Carmen Rosa Ávila**, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
- **Daniel Arango**, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
- **Diego Chitiva**, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
- **Daniel Gómez**, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
- **Natalia Ariza**, Ministerio de Educación Nacional
- **Diana Margarita Pérez**, Ministerio de Educación Nacional
- **Víctor Alejandro Venegas**, Ministerio de Educación Nacional
- **Natalia Jaramillo**, Ministerio de Educación Nacional
- **Ana Beatriz Cárdenas**, Ministerio de Educación Nacional
- **Omar Herrera**, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- **David Salamanca**, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- **Felipe Lega**, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- **Marcela Brun Vergara**, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- **José Édgar Palacios**, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- **Guillermo Cruz**, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- **Néstor Eduardo Fajardo**, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- **Ana María Zambrano**, Ministerio de Transporte
- **Giovanni Cortés**, Ministerio de Transporte
- **Jorge Carrillo**, Ministerio de Transporte
- **Andrés Mauricio Ramírez**, Ministerio del Trabajo
- **Nelson Fabián Villarreal**, Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
- **Henry Mora**, Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
- **Jorge Hernán Cárdenas**, Oportunidad Estratégica
- **Rolf Alter**, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
- **Jaime Bueno**, Presidencia de la República
- **Juan Pablo Remolina**, Procuraduría General de la Nación
- **Oliverio Huertas**, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
- **Mauricio Acevedo**, Programa de Transformación Productiva
- **Antonio Celia**, Promigás
- **Rafael Merchán**, Secretaría de Transparencia, Presidencia de la República
- **Camilo Cetina**, Secretaría de Transparencia, Presidencia de la República
- **Alice Berggrun**, Secretaría de Transparencia, Presidencia de la República
- **Claudia López**, Senado de la República
- **Daniela Reina**, Senado de la República
- **Felipe Serrano**, Superintendencia de Industria y Comercio
- **Gerardo Hernández**, Superintendencia Financiera de Colombia
- **Jorge Castaño**, Superintendencia Financiera de Colombia
- **Mauricio Arias**, Superintendencia Financiera de Colombia
- **Elisabeth Ungar**, Transparencia por Colombia
- **Alejandro Ome**, Universidad de Chicago

